

**SESIÓN DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE MICHOACÁN
03 DE OCTUBRE DE 2013
ACTA NO. TEEM-SGA-016/2013**

En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las once horas con cinco minutos, del día tres de octubre de dos mil trece, con fundamento en el artículo 275 del Código Electoral del Estado, en el inmueble que ocupa el Tribunal Electoral del Estado, sito en la calle Coronel Amado Camacho número 294, Colonia Chapultepec Oriente se reunieron los miembros del Pleno para celebrar sesión pública.

MAGISTRADA PRESIDENTA MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ.- (Golpe de martillo). Buenas días tengan todas y todos, da inicio la sesión pública convocada para esta fecha. A fin de estar en condiciones de sesionar válidamente, solicito al Secretario General de Acuerdos tenga a bien verificar el quórum legal.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Magistrada Presidenta, Señores Magistrados a fin de verificar el quórum legal para sesionar, me permito realizar el pase de lista.

MAGISTRADO FERNANDO GONZÁLEZ CENDEJAS.- Presente.

MAGISTRADO ALEJANDRO SÁNCHEZ GARCÍA.- Presente.

MAGISTRADO JORGE ALBERTO ZAMACONA MADRIGAL.- Presente.

MAGISTRADA PRESIDENTA MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ.- Presente.

Señora Presidenta, me permito informarle que existe quórum legal para sesionar.

MAGISTRADA PRESIDENTA MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ.- Muchas gracias Secretario, por favor someta a consideración del Pleno la propuesta del orden del día.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Con mucho gusto. Señora y Señores Magistrados, se somete a su consideración los puntos del orden del día previamente circulados y que fueron hechos de su conocimiento con la convocatoria para esta sesión.

Orden del día

1. Pase de lista y comprobación del quórum legal.
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura, o en su caso, dispensa de la misma, del Acta de Sesión de Pleno número 15, celebrada el 26 de septiembre de 2013.
4. Aprobación, en su caso, del Acta de Sesión de Pleno número 15, celebrada el 26 de septiembre del año en curso.



**TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA GENERAL
DE ACUERDOS**

5. Proyecto de sentencia del recurso de apelación identificado con la clave TEEM-RAP-008/2013, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo y Partido Nueva Alianza, y aprobación en su caso.
6. Proyecto de Acuerdo de Pleno de los asuntos especiales identificados con las claves TEEM-AES-001/2013, TEEM-AES-002/2013, TEEM-AES-003/2013, TEEM-AES-006/2013, TEEM-AES-009/2013, TEEM-AES-010/2013, TEEM-AES-011/2013, TEEM-AES-013/2013, TEEM-AES-015/2013, TEEM-AES-017/2013, TEEM-AES-019/2013, TEEM-AES-021/2013, TEEM-AES-022/2013, TEEM-AES-024/2013, TEEM-AES-025/2013, TEEM-AES-027/2013, TEEM-AES-028/2013, TEEM-AES-030/2013, TEEM-AES-031/2013, TEEM-AES-032/2013, TEEM-AES-035/2013, TEEM-AES-037/2013, TEEM-AES-038/2013, TEEM-AES-039/2013, TEEM-AES-040/2013, TEEM-AES-041/2013, y TEEM-AES-042/2013, y aprobación en su caso.
7. Proyecto de Acuerdo de Pleno de los asuntos especiales identificados con las claves TEEM-AES-004/2013, TEEM-AES-005/2013, TEEM-AES-007/2013, TEEM-AES-008/2013, TEEM-AES-012/2013, TEEM-AES-014/2013, TEEM-AES-016/2013, TEEM-AES-018/2013, TEEM-AES-020/2013, TEEM-AES-023/2013, TEEM-AES-026/2013, TEEM-AES-029/2013, TEEM-AES-033/2013, TEEM-AES-034/2013, y TEEM-AES-036/2013, y aprobación en su caso.

Es cuanto Magistrada Presidenta.-

MAGISTRADA PRESIDENTA MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ.-

Magistrados en votación económica se consulta si aprueban la propuesta del orden del día. Quienes estén por la afirmativa. Aprobada por unanimidad de votos, Secretario General de Acuerdos por favor continúe con el desarrollo de la sesión.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Gracias Magistrada Presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura, o en su caso dispensa de la misma, del Acta de Sesión de Pleno número 15, celebrada el 26 de septiembre de 2013.

MAGISTRADA PRESIDENTA MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ.- Señores Magistrados ¿alguna intervención? Al no existir participaciones, Secretario a votación.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Magistrada, Magistrados en votación nominal se consulta si aprueban la dispensa de lectura del Acta de Sesión de Pleno número 15, celebrada el 26 de septiembre de 2013.

MAGISTRADO FERNANDO GONZÁLEZ CENDEJAS.- A favor.

MAGISTRADO ALEJANDRO SÁNCHEZ GARCÍA.- A favor.

MAGISTRADO JORGE ALBERTO ZAMACONA MADRIGAL.- A favor.

MAGISTRADA PRESIDENTA MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ.- Por la dispensa.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Señora Presidenta, me permito informarle que ha sido aprobada por unanimidad de votos.

MAGISTRADA PRESIDENTA MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ.- En consecuencia, se aprueba la dispensa de lectura del Acta mencionada. Secretario General de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión.- - - - -

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Señora y Señores Magistrados. El siguiente punto del orden del día corresponde a la aprobación, en su caso, del Acta de Sesión de Pleno número 15, celebrada el 26 de septiembre de 2013.- - -

MAGISTRADA PRESIDENTA MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ.- Magistrados ¿alguna participación? Al no haber participaciones, Secretario a votación por favor.- - - - -

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Gracias Presidenta, en votación nominal se consulta si aprueban el Acta de Sesión de Pleno número 15, celebrada el 26 de septiembre de 2013.- - - - -

MAGISTRADO FERNANDO GONZÁLEZ CENDEJAS.- Con la aprobación del Acta.- - - - -

MAGISTRADO ALEJANDRO SÁNCHEZ GARCÍA.- A favor del Acta.- - - - -

MAGISTRADO JORGE ALBERTO ZAMACONA MADRIGAL.- Sin objeciones.-

MAGISTRADA PRESIDENTA MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ.- Conforme con su contenido.- - - - -

Señora Presidenta, me permito informarle que ha sido aprobada por unanimidad de votos.- - - - -

MAGISTRADA PRESIDENTA MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ.- En consecuencia, se aprueba el Acta de Sesión de Pleno de referencia. Secretario por favor continúe con la sesión.- - - - -

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Señora y Señores Magistrados, el siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto de sentencia del recurso de apelación identificado con la clave TEEM-RAP-008/2013, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo y Partido Nueva Alianza.- - - - -

MAGISTRADA PRESIDENTA MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ.- Secretario Everardo Tovar Valdez, por favor sírvase dar cuenta con el proyecto de sentencia que presenta la ponencia a mi cargo.- - - - -

SECRETARIO INSTRUCTOR Y PROYECTISTA.- Con su autorización Magistrada Presidenta, Señores Magistrados.- - - - -

Doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de apelación identificado con la clave TEEM-RAP-008/2013, interpuesto por los partidos Revolucionario Institucional, del Trabajo y Nueva Alianza, en contra del acuerdo CG-15/2013, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, relativo al estudio técnico sobre la distribución territorial para fines electorales.- - - - -

En principio, es preciso señalar que la autoridad responsable hace valer una causal de improcedencia, al considerar que el presente asunto carece de

definitividad, y lo hace atendiendo a dos argumentos: el primero, referente a que la facultad de aprobar en última instancia la redistribución compete al Congreso del Estado; y el segundo, relativo a que el acuerdo únicamente constituye un acto dentro del procedimiento, cuya etapa final corresponde al legislativo. Se propone declarar infundada la causal de improcedencia, por las razones siguientes:-----

c. De la Constitución y del Código Electoral no se desprende una vía idónea o apta para que el Congreso del Estado pueda revocar, modificar o anular el acto aquí recurrido, como erróneamente lo plantea el órgano administrativo electoral, ya que dichos efectos sólo podrían conseguirse a través del medio de impugnación procedente contra el acuerdo, concretamente el recurso de apelación del que compete conocer a este Tribunal.-----

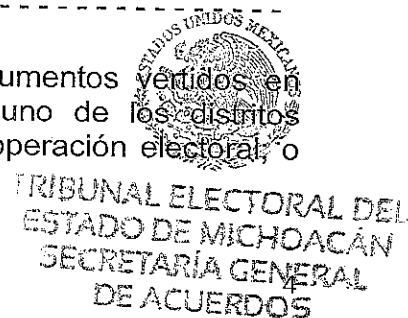
Tampoco asiste la razón en cuanto a que el estudio técnico no es definitivo porque se trata de una de varias etapas que comprende el procedimiento de redistribución, y al ser así, en todo caso deberá impugnarse la redistribución que como acto final apruebe el Congreso del Estado. Al respecto, debe señalarse que la redistribución es un acto complejo, que prevé la realización de múltiples actividades previas a la aprobación final, como lo señala la propia responsable y en ese sentido, es evidente que la autoridad administrativa debe implementar un programa de trabajos ordenados y concatenados, los cuales por regla general deben estar sujetos a un control de legalidad, a fin de constituir actos que por sí solos vayan adquiriendo definitividad y firmeza; por lo que resulta inconcuso que, contrario a lo que alega la responsable, el acto reclamado reúne los requisitos de definitividad formal y sustancial.-----

En cuanto al fondo del asunto, los partidos actores hacen valer agravios tendentes a evidenciar y controvertir violaciones procesales y formales.-----

Los primeros, consistentes en que para la elaboración del Acuerdo CG-15/2013, no se cumplió con dos etapas previstas en el cronograma de actividades, que son las marcadas con el número 16, relativa a la revisión por parte del Instituto Electoral de Michoacán; y la número 18, referente a los ajustes respecto a las observaciones y producción en formato amplio 60 x 90.-----

Respecto a la actividad 16, los recurrentes aducen que la misma no se agotó ni cumplió de forma completa y exhaustiva, tal agravio se propone calificarlo de infundado ya que de las constancias se advierte que contrario a lo esgrimido por los accionantes, sí se cumplió con dicha actividad, como queda evidenciado del contenido del acta de sesión de 29 de abril del año que transcurre, así como en la capacitación a integrantes del Consejo General e interesados, donde se destacó que a partir de la conclusión de la citada capacitación iniciaba el periodo de revisión del primer escenario, y que se recibirían todas las observaciones o nuevos escenarios que se pudieran formular, destacando que no obstante en que el cronograma se señalaron los días 15 al 17 de mayo para la revisión, éste periodo se inició a partir del treinta de abril; es decir, una vez concluida la capacitación referida, todo ello, al estar en condiciones de revisar el multicitado primer escenario, y dicha etapa concluyó el día 17 de mayo, sin que pase inadvertido para este Tribunal que en dicho periodo no se contempló la realización material de ningún acto concreto.-----

De igual forma, se propone declarar infundados los argumentos vertidos en cuanto a que no se estudió de forma conjunta cada uno de los distritos uninominales; que no se valoraron las condiciones de la operación electoral, o



que se privó a los partidos de tener una mayor participación en los trabajos, ya que tampoco en este caso los inconformes señalaron la necesidad de agregar o contemplar alguna otra actividad diferente a las establecidas en el cronograma. -

Asimismo, respecto a que no fue posible trabajar escenarios distintos al presentado por el Instituto Federal Electoral, y que con ello se privó a los institutos políticos de tener una mayor participación, debe señalarse que la autoridad administrativa electoral oportunamente entregó a los representantes de los partidos el material atinente al escenario propuesto, para que estuvieran en condiciones de formular sus observaciones o propuestas, lo que únicamente hizo el Partido del Trabajo.-----

En cuanto a la actividad número 18 del cronograma, consistente en ajustes respecto a las observaciones y producción en formato amplio 60 x 90, los actores manifiestan que no se hizo una correcta valoración y análisis sobre las observaciones presentadas por el Partido del Trabajo, ya que el pronunciamiento realizado al respecto es resultado de una valoración y determinación incongruente.-----

Agravio que se propone declarar infundado, ya que el 17 de mayo de 2013, se recibió la única observación al escenario, consistente en "una propuesta de mejoras", mismas que fue presentada por el Partido del Trabajo, el que se consideró que si bien cumplía con los criterios aprobados, no mejoraba los resultados del escenario propuesto. De ahí que se considere que no les asiste razón a los recurrentes, y ello es así, ya que los actores parten de una premisa errónea, al considerar que la presentación de una propuesta de mejora o nuevo escenario generaría forzosamente algún ajuste relacionado con la actividad número 18 del Cronograma de actividades. No obstante lo anterior, y aún cuando la propuesta del Instituto Federal Electoral es la que se determinó presentar al Congreso del Estado, el escenario propuesto por el Partido del Trabajo también se incluyó en el acuerdo impugnado, para que en su oportunidad fuera valorado.-----

En cuanto a la alegada incongruencia, tampoco asiste la razón a los recurrentes, pues si bien es cierto que la propuesta del Partido del Trabajo, si cumplía con los criterios aprobados, también es preciso señalar que el mismo no mejoraba los resultados del escenario propuesto, de ahí que se proponga calificar como infundado el agravio.-----

Respecto a las violaciones formales, los apelantes refieren que el estudio técnico no cumple con los principios rectores de la función electoral, puesto que los puntos de acuerdo en relación con las consideraciones son incongruentes y tienen contradicciones entre sí y que no se advierte una justificación completa a la propuesta de escenario presentada por el Instituto Federal Electoral, dichos argumentos se propone declararlos inoperantes.-----

Ello es así, ya que los recurrentes omiten precisar o especificar las razones por las que consideran que el estudio técnico aprobado, no cumple con los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo que rigen la función electoral, en ese sentido, tampoco enderezan razonamientos tendentes a evidenciar los motivos por los que consideran que el acuerdo materia de análisis es contradictorio en su contenido, misma situación acontecida con la afirmación en cuanto a que es incompleta la justificación de la propuesta de escenario que en su momento presentó el Instituto Federal Electoral.-----

En consecuencia, al haber resultado infundados e inoperantes los agravios, se propone confirmar el acuerdo impugnado.-----

Es la cuenta Señora Magistrada, Señores Magistrados.-----

MAGISTRADA PRESIDENTA MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ.- Muchas gracias Licenciado Tovar Valdés. ¿Alguna intervención? Señores Magistrados, está a su consideración el proyecto de la cuenta. ¿Alguna participación? Tiene el uso de la palabra el Magistrado Zamacona Madrigal. -----

MAGISTRADO JORGE ALBERTO ZAMAONA MADRIGAL.- Gracias Presidenta. He escuchado con mucha atención la cuenta que el Señor Secretario se sirvió darnos, he leído con mucho detenimiento y con mucho interés y atención, obviamente, el proyecto que la ponencia de la Magistrada Presidenta tuvo a bien circularnos oportunamente, y en esta ocasión no puedo compartir el sentido del proyecto que se somete a consideración de este Pleno. -

Para ello, creo indispensable, y dada la naturaleza e importancia que en algún momento dado tiene el asunto, como lo tienen todos los demás sometidos a la potestad de este Tribunal, dar las razones de mi posicionamiento. -----

Empezaría yo por señalar, por recordar ¿qué es lo que se está impugnando?, ¿qué es lo que los partidos apelantes trajeron a este Tribunal como -válgaseme la expresión-, como dolencia? Los partidos impugnantes se quejan de un acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán por virtud del cual se aprueba un estudio técnico, válgaseme la expresión, un mero estudio técnico. Creo que aquí cabe recordar que en materia administrativa como bien es sabido por los miembros de este Pleno, los órganos del Estado tienen diversas clasificaciones, dentro de las que podemos señalar, la que aquí nos interesa, que se pueden clasificar como órganos ejecutivos, órganos consultivos o bien como órganos de control, que en el caso concreto creo válido decir, que el Instituto Electoral de Michoacán a través de su Consejo General actuó como un mero órgano consultivo. Un mero órgano consultivo en virtud de que el artículo 152, fracción XXXVII del Código Electoral del Estado, le otorga la facultad al Instituto de realizar un estudio técnico que en su oportunidad presentará al Congreso del Estado para llevar a cabo una posible redistribución en la geografía michoacana. -----

Visto así, visto que el Instituto Electoral realizó una mera cuestión propositiva o de consulta que le mandata la ley, llegamos a la conclusión, llego yo a la conclusión, de que lo que está sobre la mesa, lo que impugnaron los partidos apelantes, es, si me valen la expresión nuevamente, una mera opinión, un estudio que no es vinculante, un estudio que el Congreso del Estado puede, en mi concepto ahí me aparto de manera diametral del proyecto, puede en mi concepto, en los hechos, modificar, revocar o anular. -----

Ciertamente, a lo mejor no hay una disposición expresa que nos diga, el Congreso podrá anular, no necesitamos que exista, cuando el artículo 44 en su fracción VII de la Constitución Política del Estado de Michoacán le concede al Congreso del Estado la facultad -facultad obligatoria, que no potestativa- la facultad de resolver sobre la división política, judicial y administrativa del Estado de Michoacán. -----

Lo que está haciendo nuestra Constitución es ordenarle al Congreso que sea él, y solamente él, el que resuelva una posible redistribución en nuestra geografía



TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA GENERAL
DE ACUERDOS

michoacana. Por ende, en mi opinión, no depara perjuicio el acto reclamado a los impugnantes, no pueden decirse, o decir que se duelen de algo que no les causa perjuicio, puesto que el Congreso del Estado podrá, en su momento, tomar en cuenta o no tomar en cuenta, esa opinión consultiva, ese estudio técnico que realizó el Instituto Electoral de Michoacán. -----

Por ende, creo yo que se actualiza la fracción III del Artículo 10 de la Ley de Justicia Electoral y Participación Ciudadana del Estado, esto es, que el acto reclamado no irroga un perjuicio al recurrente. Mas sin embargo, creo que no para ahí la cosa, creo que tenemos más elementos a analizar, considero que el acto impugnado no es definitivo, es decir, no sólo no irroga agravio a los recurrentes, sino que no tiene la característica de definitividad para poder ser impugnado ante este Tribunal y este Tribunal poder avocarse al conocimiento del mismo se requiere, con lo cual se estaría actualizando la causal de improcedencia, establecida en la fracción V, del Artículo 10 de la citada Ley de Justicia Electoral. -----

¿Por qué considero que no es definitivo? Ya lo decía en un primer momento, y lo reitero ahora, el Congreso del Estado puede, válidamente puede, legalmente, constitucionalmente, no tomar en cuenta el estudio que le remita en su momento el Instituto Electoral de Michoacán, el Congreso del Estado no está vinculado con ese estudio de manera alguna, de forma tal, que al no estar vinculado, creo yo que no tiene el carácter de definitivo, pero más aún, creo yo que tenemos que hacer un análisis de nuestro texto constitucional y específicamente me refiero al Artículo 98, apartado A, de nuestra Constitución que establece que este Tribunal es órgano autónomo y máxima autoridad en materia electoral. -----

¿Qué deduzco yo de ese Artículo 98? Yo de ese Artículo 98, deduzco que el poder constituyente permanente, o bien, para no herir susceptibilidades de los neo-constitucionalistas, el poder revisor de la Constitución, determinó que la sentencias que dicte este Tribunal como máxima autoridad electoral en la materia en el Estado de Michoacán, se acatan y no se revocan, por ninguna autoridad estatal, es decir, las sentencias que dicta este Tribunal, no es para ver qué les parecen a las autoridades michoacanas, es para que las autoridades michoacanas, las acaten y las obedezcan. -----

Ciertamente, no hay que olvidar que lógicamente estamos inmersos en un federalismo, afortunadamente estamos inmersos en un federalismo, desde el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, vivimos un federalismo y como consecuencia del federalismo, lógicamente los miembros de este Pleno tenemos bien claro que puede haber autoridades de competencia o en el ámbito federal que pueden, eventualmente, llegar a revocar, modificar o anular las decisiones que tome este Tribunal. Sin embargo, en el Estado, en mi concepto, no hay una autoridad que pueda no acatar válidamente, constitucionalmente, las decisiones de este Tribunal. -----

Por ello, si este Tribunal entrara a conocer el fondo del asunto que se nos plantea el día de hoy, creo yo que la resolución puede, eventualmente, ser modificada por el Congreso del Estado, incluso si me apuran y aunque se oiga feo, puede ni siquiera voltear a ver nuestra resolución y creo yo que el espíritu del poder revisor de la Constitución no fue ese, creo yo que el espíritu del poder revisor de la Constitución fue que las sentencias de este Tribunal se acataran y se cumplieran, y si este Tribunal declara la nulidad de una elección y nadie la impugna ante el ámbito federal, esa elección es nula, y si me permiten la

expresión, ni Dios padre quita la nulidad ya, insisto, sin olvidar que estamos inmersos en un federalismo. -----

Entonces, si el Congreso del Estado puede no tomar en cuenta esta resolución del Tribunal, por el diseño constitucional, no es ninguna crítica a ninguno de los poderes, obviamente, el Artículo 44, ya lo mencionaba yo en su fracción VII, de manera muy clara, muy puntual, y si me apuran, a lo mejor muy acertada, le confiere esa facultad al Congreso del Estado: "Tú, Congreso del Estado, definirás la división en distritos electorales". -----

Por ello, yo considero que el acto no es definitivo, el Tribunal no puede resolver como máxima y última autoridad estatal, y en consecuencia, en mi concepto, no puede conocer de este asunto y concluyo haciendo referencia a algunos precedentes que se invocan en el proyecto, específicamente me llama la atención a mí, dos precedentes que se mencionan; por un lado, se menciona un precedente del Estado de Quintana Roo, un precedente del Estado de Quintana Roo que me pareciera en principio muy interesante ¿por qué?, porque nos habla de la definitividad de las etapas en las instancias electorales.-----

Creo yo, que incluso ni siquiera requerimos de precedente para decir que la firmeza del procedimiento es garantía de las partes y las etapas van quedando firmes en cada uno de sus momentos, mas sin embargo, creo que no guarda similitud del asunto que se nos invoca en el proyecto ni de manera orientadora, y lo digo obviamente con todo respeto, en virtud de que la Constitución del Estado de Quintana Roo es muy diferente a la Constitución de Michoacán. -----

Dice el Artículo 49, párrafo VI, de la legislación de Quintana Roo, que el Instituto Electoral de Quintana Roo tendrá a su cargo, en forma integral y directa, además de las que determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía estatal --continúa el artículo--, lo importante creo que lo tenemos ahí, quien resuelve en última instancia en el Estado de Quintana Roo la redistribución de la geografía de esa entidad federativa es el Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, de forma tal que la resolución que a ese respecto dicte el Instituto Electoral es definitiva, es definitiva y por tanto en mi concepto impugnabile. -----

Ahora bien, la Ley Electoral ya específicamente del Estado de Quintana Roo en su Artículo 28, establece que el ámbito territorial de los 15 distritos electorales uninominales del Estado, se determinará mediante la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Consejo General y se sujetará a los criterios siguientes, se corrobora lo que ya nos dijo la Constitución del Estado, dentro de estos criterios termina diciendo que una vez concluidos los trabajos de distritación, en el Instituto Electoral, la resolución que en su caso expide el Consejo General se mandará publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado ¿para qué?, para que se cumpla, para que se obedezca.-----

Ahora bien, por lo que refiere al otro precedente que se nos cita, que es una impugnación en relación con el Estado de Veracruz, consideraría yo que tampoco es aplicable en cuanto a que se refiere de una redistribución a nivel federal, que en consecuencia por no ser una redistribución estatal no pudiera ser motivo de análisis. -----

Recapitulo, brevemente, yo creo que en el asunto que está sobre la mesa no existe un agravio personal y directo para los impugnantes, todavía no les depara ningún agravio, probablemente la resolución que en su caso dicte la

determinación que en su caso tome el Congreso del Estado, pueda depararles algún perjuicio, no lo sabría yo, y probablemente habrá que buscar el medio para que impugnen si así desean hacerlo ellos, pero ahorita no les depara perjuicio y por otro lado, no se presenta tampoco el aspecto de definitividad que en mi concepto deben de reunir las resoluciones para que puedan ser recurribles ante esta máxima autoridad electoral en la materia en el Estado de Michoacán. Muchas gracias Magistrada Presidenta.-----

MAGISTRADA MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ.- A usted Magistrado. ¿Alguna otra intervención? Si no hay intervenciones y bueno considerando que el proyecto que está sobre la mesa, es una propuesta de esta ponencia, daría respuesta muy, muy concreta a los argumentos que se plantean en contra del proyecto.-----

En principio y por cuanto ve a que lo que se impugna es un Acuerdo General, que a decir del Magistrado Zamacona Madrigal es un acuerdo, un simple estudio técnico que no genera ningún perjuicio a los actores y que tampoco es definitivo, yo sostendría y sigo sosteniendo mi postura, en principio diría una cosa; ciertamente, el Código Electoral le confiere al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, la facultad de llevar a cabo el desarrollo y la elaboración de un estudio técnico para fines electorales, estudio técnico que en su momento habrá de remitirse al Honorable Congreso del Estado. -----

Este estudio técnico, señala el Magistrado Zamacona Madrigal, que el Congreso puede tomarlo o no tomarlo en cuenta, puede, yo quiero llamar la atención en esto: "puede". El hecho de que el Congreso pueda tomarlo o no tomarlo en cuenta, señala el Magistrado Zamacona Madrigal, implica que el Congreso puede revocar o modificar un acuerdo del Instituto Electoral de Michoacán, ¿por qué no comparto esa opinión? -----

Primero. Ciertamente, en el mes de diciembre del año pasado si no mal recuerdo, el Instituto Electoral de Michoacán, aprobó un Acuerdo en el que se establecieron los lineamientos para la elaboración de ese estudio técnico, que dicho sea de paso fue impugnado ante este Tribunal y, por unanimidad, el Pleno determinó abordar su análisis.-----

Entonces, para empezar, desde ahí el Pleno hubiera considerado que al no causarle ningún perjuicio ni tener interés jurídico, pues no habríamos entrado, porque finalmente, pues lo que en un momento dado, si asumiéramos la postura del Magistrado, estaríamos en el entendido de que lo que le generaría perjuicio a los actores políticos, sería la determinación final que asumiera o que adoptara el Congreso del Estado, sin embargo, insisto, el Pleno por unanimidad determinó abordar el estudio de ese asunto, ya desde el acuerdo original. -----

Considero yo, que en un Estado de Derecho, todos y cada uno de los actos deben estar sujetos a un control de legalidad y, por supuesto, los actos emanados del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, no deben de ser la excepción. Incluso también, quiero en este momento recordar, que ya este Tribunal, incluso, cuenta con un precedente que ha constituido una tesis relevante en la que se ha determinado incluso, que los actos del Secretario General son impugnables, pero además también, actos o dictámenes de la Comisión de Fiscalización, que en un momento dado servirán para emitir una determinación final. -----



TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA GENERAL
DE ACUERDOS

Entonces, entre otras muchas causas, es lo que a mí me lleva –pero principalmente– por la convicción de que todos los actos de la autoridad electoral deben estar sujetos a un control de legalidad, es por lo que considero que debe abordarse el análisis del fondo del medio de impugnación traído al Tribunal Electoral de Michoacán, y ¿por qué más?, el Magistrado señala que no es un acto definitivo ni es un acto firme, ciertamente, el artículo 10 de la Ley de Justicia Electoral y Participación Ciudadana señala, entre otras causas de improcedencia, ¿el que no se hayan agotado las instancias previas, qué es uno de los aspectos que llevarían a considerar que es un acto definitivo? ¿Aquí no hay ninguna instancia previa que debiera agotarse, antes de llegar al Tribunal?, entonces, ya ahí está satisfecho el requisito. Por las que se pudiera haber modificado o revocado el Acuerdo que se está impugnando, en mi concepto se da perfectamente esta posibilidad.-----

Ciertamente, aunque no, la norma no es clara, no hay ninguna disposición que expresamente diga que: “¿El Congreso puede o no, tomar en cuenta el estudio técnico?”, no, no lo hay, ciertamente la facultad es expresa del Congreso del Estado llevar a cabo la redistribución, sin embargo, no hay una disposición de la que nosotros podamos advertir que el Congreso pueda o no tomar en cuenta. Pero, insisto, el término “pueda”, para mí basta con que se diga *puede*, para que en mi concepto ya, pueda generar un perjuicio a los actores políticos.-----

Qué pasaría, si en ese poder, de poder o no, el Congreso decide adoptar, tal cual, el estudio técnico; pues que ya sería algo consentido por los actores políticos, insisto, pero además, estaríamos exceptuando de control de legalidad un acto, de una autoridad electoral, porque el Congreso, en un momento dado, si decidiera, no optó por considerar ese estudio técnico, no estaría ejerciendo un control de legalidad, entonces, no sé si coincidan conmigo, pero prácticamente no estaría ejerciendo, sino que simplemente en ejercicio de sus facultades soberanas, determinaría considerarlo o no, pero no estaría revisando la legalidad del acto y ciertamente, nosotros estamos invocando, como vía de orientación, no como un precedente obligatorio, el caso de Quintana Roo, que ciertamente lo revisamos y coincidimos plenamente en que no se trata de un asunto exactamente igual, por supuesto que allá, el Consejo General o el Instituto Electoral es el encargado de llevar a cabo todo el procedimiento de la redistribución, el procedimiento desde el inicio, hasta la conclusión.-----

Pero entonces, bajo la lógica de, que bueno, como las etapas no son definitivas, pues tampoco esas etapas serían impugnables y de ahí precisamente se estableció el tema de la tesis que se invoca en vía de orientación, que literalmente dice: “REDISTRITACIÓN. LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES ADOPTADOS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL, DURANTE LAS FASES DEL PROCESO CORRESPONDIENTE, ADQUIEREN DEFINITIVIDAD SI NO SE IMPUGNAN”. Es decir, cada etapa va adquiriendo definitividad, si no se impugna. En este caso, en mi opinión, por mayoría de razón, la etapa final con la que concluye la intervención de la autoridad administrativa electoral, para los efectos de la redistribución.-----

En esencia, son las razones por las que yo seguiría manteniendo el proyecto, y bueno, lo dejaría a consideración de los integrantes del Pleno. ¿Alguna otra intervención? Adelante Magistrado Fernando.-----

MAGISTRADO FERNANDO GONZÁLEZ CENDEJAS.- En mi opinión estoy plenamente de acuerdo con el sentido del proyecto y con la argumentación contenida en el mismo ¿por qué?, creo que ya los dos ponentes anteriores,

Magistrados, fueron muy claros, muy precisos en los conceptos, yo simplemente hago una reflexión y una ponderación. -----

Considero que no podemos excluir acto alguno, de autoridad alguna electoral que no sea impugnante, precisamente en la tesis que fue invocada por usted, fue formada en mi ponencia; de un acto del Secretario del Instituto Electoral, que no está previsto en la ley, si pues, pero si no está previsto en la ley, entonces ¿sus actos no son impugnables?, y creo que esa tesis convertida en criterio firme, ha servido de base, de fundamento tanto para este Tribunal como para otros tribunales y para el propio Instituto Electoral.-----

Entonces por lo tanto, si nos basamos en que no es un acto definitivo, porque puede el Congreso del Estado tomarlo en cuenta o no tomarlo en cuenta, pues yo considero que no es una razón suficiente, no es una razón suficiente toda vez que entonces si nosotros, nuestras resoluciones como también ya se precisó, son definitivas en el Estado, pero también sujetas a una revisión por una autoridad federal la cual puede modificar, confirmar o revocar, yo hago la comparación con el Congreso del Estado, puede modificar, revocar ese acuerdo si no, no tendría caso el por qué, se le hubiera solicitado precisamente ese estudio técnico, el cual emitió, es una resolución de un órgano electoral como pudo ser correcta o incorrecta ¿cuál es la función de este Tribunal? simplemente revisar esos actos, yo parto desde ese punto de vista, por lo tanto ya sin profundizar más, por eso es que estoy de acuerdo con el proyecto en toda y cada una de sus partes y con el sentido. Gracias.-----

MAGISTRADA PRESIDENTA MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ.- Gracias Magistrado. ¿Alguna otra intervención? Adelante Magistrado Sánchez García.- -

MAGISTRADO ALEJANDRO SÁNCHEZ GARCÍA. Gracias Presidenta. Sin pasar a una discusión, sino simplemente para sentar la razón de por qué estoy yo de acuerdo con el proyecto, con pleno respeto a las cuestiones emitidas al Magistrado Jorge Zamacona, debo decir que en un principio cuando yo escucho que se va a impugnar el acuerdo, mi primera impresión fue, bueno, pues es un acto no definitivo, me pongo a estudiar desde ese momento y advierto que podría no serlo, cuando nos llega el expediente, que tengo acceso a las copias yo advierto, estoy de acuerdo primero que nada, con el sentido del proyecto y con los argumentos, esto es algo adicional aquí en el Pleno que informo por qué voy a votar en ese sentido, yo advierto que no se están agravando en contra del acuerdo *per se*, es decir, del acuerdo como continente, sino de su contenido, no se agravan del acuerdo, materialmente hablando, sino de la forma del contenido del acuerdo ¿por qué?, porque dicen los apelantes que vienen en contra del acuerdo que contiene la aprobación del estudio técnico del Instituto Electoral de Michoacán, pero que esa aprobación no respetó dos puntos, ¿qué estamos haciendo nosotros como Tribunal?, revisar si efectivamente se respetaron o no se respetaron, si fuese el caso que no se respetaron, llegaría un estudio incompleto al Congreso del Estado, si nos basáramos en la consideración que no podemos revisar, lo que se está haciendo en el proyecto es analizar si se respetó o no se respetó, un cronograma que se fijó para ver que se hayan cumplido las formalidades esenciales de ese procedimiento y no es una cuestión menor porque me di a la tarea también de investigar cuestiones relativas a la doctrina contemporánea sobre los estudios socio-legales del Estado de Derecho.-----

¿Qué tiene que ver esto? Bueno, que en todo el mundo se establecen los estados, nación como estados-área. Los estados-área, en los estados que se

precien de ser como México, democráticos, busquen una representación en sus Cámaras, de ahí que se haga necesario ver que esta densidad demográfica que se reparten los estados-áreas, digamos Estado de Michoacán, en concreto sea equitativa, para que la representación de los diputados sea equitativa conforme a los municipios que tiene el Estado; y yo advierto, y por esto también comparto el sentido, que el Estado de Derecho analizado desde la democracia sustancial, que es lo que trae precisamente esto, porque se va a dividir, o se pretende redistribuir el Estado para efectos democráticos de la votaciones y de la representación, este equivale a otorgar soluciones a los problemas normativos, tenemos un problema normativo, ¿cuál?, que el Acuerdo se dice que no cumplió dos puntos, que hay que revisar, el Congreso no estaría facultado, creo yo, porque la Constitución no le da esa facultad de revisión procedimental de decir: "oye, te lo tomo en cuenta -en el caso de que fuera- te lo tomo en cuenta o no te lo tomo en cuenta, porque faltaron cumplimentarse estos dos puntos", no podría el Congreso del Estado, para eso, precisamente, se crean los órganos de control de la legalidad, como este Tribunal.-----

Entonces, continuando con lo de que, si esto es así, en relación al Estado de Derecho con la Democracia sustancial, el Estado de Derecho como lo decían los estudios socio-legales contemporáneos, está regido por el dominio de la ley o el imperio de la ley, entendida como el mando, como un orden metódico de un proceso formal por medio del cual se aplica la norma.-----

¿Qué estamos nosotros revisando? Cumpliendo con el Estado de Derecho, revisando lo que debe de llevar a cabo un procedimiento formal, de un cronograma de actividades, porque no es cosa menor revisar este Acuerdo que, puede o no tomar el Congreso, eso es muy respetable, pero, que vaya completo.-----

Continúo, con lo que refiero del porqué del sentido de mi voto. Así se utiliza la regla de la ley entendida ésta, como la forma de que se aplican en concreto las leyes en sí mismas, ya que en la ley misma, es quién señala cuáles son los derechos del ciudadano y cuáles las obligaciones del Estado. Bueno, nosotros como órganos de Estado, nos da la obligación, imperativamente, de revisar mediante un control de legalidad, los actos que hace el IEM, pero este control de legalidad no nada más va investido en forma lisa y llana al fondo del asunto, es revisar el procedimiento que se lleva en los expedientes, que es lo que se está analizando precisamente aquí, que si se cumplieron o no se cumplieron dos puntos.-----

Bueno, yo digo por eso que estoy de acuerdo con el proyecto, ¿por qué razón?, además de los argumentos que ya se vertieron tanto por la Magistrada Presidenta como por el Magistrado González Cendejas, en el sentido de que si no se sometiera esto a la revisión del Tribunal, ya no me refiero a los precedentes, si no se sometiera, dejaríamos a dos partidos que hoy impugnaron, sin la certeza de que se está revisando el proceder del Instituto Electoral, si se les va a conceder o no la razón, eso se ve en el proyecto, pero, si hay la certeza de que se le otorga al ciudadano por parte de este Tribunal, a través de que está cumpliendo con el Estado de Derecho apegado a los estudios socio-legales contemporáneos, con una revisión que permite advertir, si corresponde o no, darles la razón.-----

Definir, que no correspondiere estudiarlo como lo he mencionado, haríamos nugatorio un derecho y en este caso, si el expediente llegase o el dictamen técnico llegase al Congreso, igual puede o no puede tomarlo en cuenta, pero yo

creo que el Pleno quedará convencido y este Tribunal y la sociedad de que si llega, llegará un documento completo y ya será otro momento, si ese documento que esté completo el Congreso lo quiera utilizar para redistribuir o no, porque efectivamente es la máxima, única más bien, la única autoridad para poder aprobar una redistribución, porque es un estudio técnico; y, cerraría la intervención refiriendo muy sencillo con una analogía, si una convocatoria sale, las personas que se inscriben pueden impugnar dos cosas de una convocatoria: la convocatoria en sí, si les para un perjuicio o que no se cumplió el procedimiento de la convocatoria internamente, pero no se van a dar cuenta hasta que no se cierra el proceso de la convocatoria y es hasta ese momento cuando ya pueden sentir ese daño, lo traigo a la analogía que refería con el acuerdo, bueno, ellos, los impugnantes dicen: hay un cronograma, dos actividades no se cumplen, revisa, hay que revisar Tribunal si esto se cumple conforme a la legalidad. -----

Eso es lo que yo advierto, por las razones que el proyecto es correcto, se está revisando a esto le sumo los precedentes que hay, y es la razón por la que emitiré el sentido de mi voto conforme, al proyecto que se presentó. Es cuanto, gracias.-----

MAGISTRADA PRESIDENTA MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ.- Gracias Magistrado. ¿Alguna otra intervención? Al no haber intervenciones Secretario a votación por favor.-----

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Señores Magistrados, en votación nominal se consulta si aprueban el proyecto de sentencia del recurso de apelación identificado con la clave TEEM-RAP-008/2013, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo y Partido Nueva Alianza.-----

MAGISTRADO FERNANDO GONZÁLEZ CENDEJAS.- A favor del proyecto.-----

MAGISTRADO ALEJANDRO SÁNCHEZ GARCÍA.- A favor del proyecto.-----

MAGISTRADO JORGE ALBERTO ZAMACONA MADRIGAL.- En contra del proyecto anunciando que emitiré voto particular.-----

MAGISTRADA PRESIDENTA MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ.- Es mi propuesta.-----

Señora Presidenta, me permito informarle que ha sido aprobado por mayoría de votos, con un voto en contra emitiendo voto particular el Magistrado Jorge Alberto Zamacona Madrigal.-----

MAGISTRADA PRESIDENTA MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ.- Gracias Secretario. En consecuencia, en el recurso de apelación 8 de 2013, este Pleno resuelve:-----

Se confirma el acuerdo impugnado.-----

Secretario General de Acuerdos por favor continúe con el desarrollo de la sesión.-----

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Señora y Señores Magistrados, el siguiente punto del orden del día corresponde a los Proyectos de Acuerdo de

Pleno de los Asuntos Especiales identificados con las claves TEEM-AES-001/2013 al TEEM-AES-042/2013, interpuestos por Ma. Irma Guerra Vidales y otros.-----

MAGISTRADA PRESIDENTA MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ.- Secretaria Martha Margarita García Rodríguez, le pido de favor se sirva dar cuenta con los Proyectos de Acuerdo de los Asuntos Especiales que presenta la ponencia a cargo del Magistrado Jorge Alberto Zamacona Madrigal.-----

SECRETARIA INSTRUCTORA Y PROYECTISTA.- Con su autorización Magistrada Presidenta y Señores Magistrados.-----

Doy cuenta a ustedes, con el proyecto de acuerdo, relativo a los asuntos especiales, identificados con la claves TEEM-AES-01, 02, 03, 06, 09, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 todos del 2013, promovidos por Ma. Irma Guerra Vidales, y otros, mediante los cuales controvierten lo siguiente: 1) El nombramiento del ciudadano Pedro Rojas López, como Jefe de Tenencia de San Martín Totolán, municipio de Jiquilpan, Michoacán; 2) El oficio p-525-13, de data 18 de abril del año 2013, firmado por el Presidente Municipal de Jiquilpan, Michoacán; 3) El acta de cabildo número 46 de fecha 11 de enero del año 2013 y, 4) La falta de reconocimiento de su derecho a elegir un nuevo Jefe de Tenencia de la comunidad multicitada.-----

Del análisis de los asuntos se advierte que existe conexidad en la causa por lo que se propone la acumulación de los anteriores asuntos al diverso TEEM-AES-01/2013, por ser éste el primero que se recibió en oficialía de partes de este Órgano Jurisdiccional.-----

Del mismo modo, doy cuenta con el proyecto de acuerdo, relativo a los asuntos especiales, identificados con las claves TEEM-AES-04, 05, 07, 08, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 29, 33, 34 y 36 todos del 2013, promovidos por Yiseth Guadalupe Ruiz López y otros, mediante los cuales se controvierten los primeros cuatro actos señalados con anterioridad, así como la negativa de realizar las actuaciones solicitadas en el escrito de fecha 18 de abril del año 2013. Igual suerte corren los asuntos en estudio, al advertirse conexidad en la causa, por lo que se propone su acumulación, al TEEM-AES-04/2013, por ser éste el primero en ser presentado ante este Tribunal Electoral.-----

Una vez hechas las apreciaciones anteriores, de autos se advierte que las demandas fueron presentadas ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, mismas que fueron turnadas a la primera ponencia del mencionado tribunal, resolviendo que era incompetente para conocer y resolver las demandas intentadas, dado que los hechos que ahora los actores pretenden impugnar constituyen actos de materia electoral, resultado de ello, se inhibió del conocimiento de las citadas demandas y ordenó remitir los autos de los expedientes a este Órgano Jurisdiccional, el cual según su criterio era el encargado de conocer y resolver las controversias planteadas, toda vez que dicho nombramiento se hizo por medio de "plebiscito" Empero de ello, debe decirse que este Órgano Colegiado no tiene competencia para conocer y resolver la pretensión de los actores en los asuntos especiales origen de los presentes acuerdos; ello es así, toda vez que aquí lo que interesa, es la designación del Jefe de Tenencia, en el caso en concreto, no constituye materia electoral, pues no se impugna a través del procedimiento adecuado, un cargo a elección popular.-----

TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA GENERAL
DE ACUERDOS

No pasa inadvertido para este Órgano Colegiado, que si bien, las controversias generadas con motivo de la celebración de los procedimientos de referéndum o plebiscito, son competencia del Tribunal Electoral, de los autos de los asuntos especiales en estudio, no se advierte controversia generada con motivo de la celebración de alguno de dichos procedimientos.-----

De ahí que, una vez realizado un estudio detallado y especial de las pretensiones deducidas de los escritos presentados, se puntualiza que los hechos impugnados tienen específicamente el carácter de administrativos; y no así relación con la designación de autoridades electas por medio del voto universal, libre, secreto y directo, lo cual sin lugar a dudas, otorgaría competencia a este Tribunal Electoral para analizar el fondo de la litis plateada en los asuntos especiales multicitados; resultado de ello, los juicios en contra de actos de los Ayuntamientos, vinculados con la designación de auxiliares de la administración pública municipal, corresponde a la materia contenciosa administrativa.-----

Lo anterior tiene sustento en la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL JUICIO RELATIVO ES PROCEDENTE CONTRA ACTOS DE LOS AYUNTAMIENTOS, VINCULADOS CON LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PREVISTOS EN LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, AL NO TRATARSE DE COMICIOS PERTENECIENTES A LA MATERIA ELECTORAL".-----

Con estas distinciones, es inconcuso que no es posible atender a las solicitudes de los escritos presentados por los recurrentes, a través del Juicio de Inconformidad y el Recurso de Apelación, únicos medios de impugnación competencia de este Órgano Jurisdiccional, ello en virtud de que, no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en la normativa electoral respecto de los mismos, lo cual conduce a que, tampoco se pueda examinar el mérito de la pretensión jurídica de los actores de los asuntos especiales en estudio.-----

En consecuencia, y a fin de salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la justicia, establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se propone:-----

Uno. Decretar la acumulación de los asuntos de merito.-----

Dos. Declarar la incompetencia de este Tribunal Electoral para conocer de los presentes asuntos.-----

Tres. Remitir los autos de los expedientes en estudio, a la Sala Colegiada del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo, para que resuelvan lo que en derecho proceda.-----

Es cuanto Señora y Señores Magistrados.-----

MAGISTRADA PRESIDENTA MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ.- Muchas gracias Secretaria García Rodríguez. Señores Magistrados a su consideración los proyectos de cuenta. ¿Alguna intervención? Adelante Magistrado González Cendejas.-----

MAGISTRADO FERNANDO GONZÁLEZ CENDEJAS.- En primer lugar quiero manifestar, que no estoy de acuerdo con lo que se determina en el Acuerdo que

TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA GENERAL
DE ACUERDOS

se nos pone a consideración de este Pleno, no estoy de acuerdo ni con lo que se acuerda en el sentido de la declaración respecto a la competencia ni tampoco a que sea remitido a declararnos incompetentes, y que sea remitido nuevamente al Tribunal Administrativo, quien fue quien lo envió y precisamente voy a tratar de dar mis razones, que desde un principio nunca he estado de acuerdo, desde que llegaron esos expedientes, en la acumulación de los mismos, que fueran distribuidos a diferentes ponencias.-----

¿Por qué no estuve de acuerdo?, porque había una acumulación de conexidad y precisamente yo creo que desde ahí, manifesté o se desprendió mi inconformidad, porque los expedientes que fueron remitidos a mi ponencia para su proyección, inmediatamente se dictó un acuerdo devolviéndolos a la Secretaría de aquí del Tribunal, ¿por qué?, porque tenía conocimiento que había otros expedientes de la misma índole, primeramente en la ponencia del Magistrado Jorge Zamacona, 25 si no mal recuerdo, 9 en la ponencia de la Presidencia y 3 que me fueron enviados a mí, que al final de cuentas se coincidió en criterios de acumularlos por conexidad.-----

También desde que tuve en mi poder los expedientes, consideré yo que no era necesario o que todavía procesalmente no era procedente dictar un auto de radicación, ¿por qué lo consideré así? Lo consideré en primer término, porque todavía no se determinaba, no se dictaba un auto de admisión, el Tribunal Administrativo nunca dictó auto de admisión, se declaró incompetente y lo envía a este Tribunal, un ponente ni siquiera fue por Acuerdo del Pleno de dicho Tribunal, pero haciendo una interpretación de su normatividad, pues si tenía esa facultad, vamos a aceptársela tenía esa facultad de declinar, pero ahí se daba precisamente un conflicto de competencias de tribunales, un conflicto de competencias de tribunales, que aún no se dictaba auto de admisión, por lo tanto, en mi opinión personal y con todo respeto, por eso sostenía que no era procedente en ese momento dictar un auto de radicación y un auto de radicación en donde, pues me perdí porque ni se requirió a las partes ni se les concede término y en mi opinión se dejan en un estado de indefensión, para qué llamo o para qué comunico a una autoridad, a un tercero interesado, que yo aquí no le nombraría tercero interesado, porque es una demanda, no es un procedimiento o un medio de impugnación en materia electoral, porque nosotros cuando damos vista con el Secretario en el Instituto recibe una queja le da vista precisamente al tercero interesado ¿para qué? para que manifieste en un término que se le concede lo que a sus intereses convenga.-----

Aquí me quiero poner en el lugar del Presidente Municipal de Jiquilpan, donde se le comunica que el Tribunal Electoral va a conocer de 42 demandas de amparo o está conociendo pero ni siquiera se le mandan copias ni se le concede término, nada más se le dice: "Mira, aquí te tengo; voy a resolver", creo yo que lo deja en estado de indefensión, violación precisamente aquí a los derechos fundamentales. Considero que por eso con todo respeto, no compartí yo el auto de radicación.-----

Pero ahora ¿por qué hago, por qué señalo estos precedentes? o ¿por qué señalo, hago esta narrativa? Precisamente para no es, digamos, el no estar de acuerdo con el sentido que se acuerda en este proyecto de acuerdo --perdón la redundancia-- precisamente es porque desde un principio y en mi opinión muy personal, jurídicamente y procesalmente pues, creo que fue incorrecto, tanto lo que hizo el Tribunal Administrativo como lo que iniciamos nosotros aquí y precisamente mi voto no es un voto sentimental, no es un voto presionado, no, no, es mi criterio y ¿por qué no estoy de acuerdo ahora con este sentido ni con

el argumento? En primer término ya yendo al fondo, creo que no estamos en condiciones o no era el momento procesal oportuno de analizar, de determinar, respecto a ciertas cuestiones de fondo. ¡No! aquí la litis, vamos, el acto por el cual se nos puso a disposición es para determinar la competencia, si éramos competentes o no éramos competentes.-----

Incluso ahí, sin entrar creo que eso es lo bueno de un Tribunal Colegiado, precisamente para conocer los diferentes criterios de los integrantes del Pleno, quizás siempre quisiéramos nosotros que fuera por unanimidad, pero creo que no es ese el sentido de un Tribunal Colegiado y lo bueno es de que, bueno vamos a externar nuestros criterios, nuestras opiniones y creo que los integrantes del Pleno, todos son gente mucho muy preparada, un Doctor en Derecho, un Maestro en Derecho, la Presidenta con 12, 15 años de experiencia, yo digo tener experiencia en materia electoral, porque desde el 92 estoy sobre de esto, candidato a Maestro en Derecho, creo que tenemos la capacidad para defender nuestros criterios y en este caso precisamente con la reforma a la Constitución en el artículo primero, de junio del 2011, ¿qué es lo que hay que ponderar?, los derechos fundamentales del ciudadano y el mismo artículo primero constitucional, nos impone una interpretación conforme ¿qué entendemos por una interpretación conforme?, todos la sabemos, la convencionalidad.-----

Y precisamente viendo el escrito de demandas de los ciudadanos que acudieron ante el Tribunal Administrativo, hicieron valer o hacen valer, que se aplique la Convencionalidad de los Tratados Internacionales, que se aplique y yo aquí me voy por el principio pro-persona, lo que más beneficie al gobernado y yo creo que aquí es importante ¿cuántos gobernados, cuántos ciudadanos, acudieron a solicitar justicia ante el Tribunal Administrativo?, y me pongo a pensar, el Tribunal Administrativo se declara incompetente para conocer de sus demandas, y ahora nosotros, Tribunal Electoral, nos declaramos también incompetentes; en dónde quedaron los derechos fundamentales de todos esos ciudadanos, y precisamente en el proyecto se habla, que conforme al artículo 17 constitucional, ¿qué dispone, qué garantía encontramos en el artículo 17 constitucional?-----

Pues que la justicia debe ser pronta y expedita, ¡ah! pero los Tribunales aquí, pues no la vamos hacer pronta y expedita, propiamente ya la hemos entretenido en resolver, en entrar al estudio, responsabilidad de quién, creo que el caso al principio se veía muy sencillo, pero no es tan sencillo como parece, yo en mi opinión.-----

Entonces considero que si debemos dar una respuesta al ciudadano y dar cumplimiento a esa garantía consagrada en el artículo 1° constitucional. Tuve muchas dudas para resolver, para poder emitir mi criterio y ahora emitir mi voto, ¿por qué tuve dudas?, precisamente en la jurisprudencia que se invoca en el proyecto, atinadamente, de la novena época, referente nada más como referencia para no perder la ilación, la tesis 91 del 2008, que en su rubro dice: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL JUICIO RELATIVO ES PROCEDENTE CONTRA ACTOS DE LOS AYUNTAMIENTOS VINCULADOS CON LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PREVISTOS EN LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, AL NO TRATARSE DE COMICIOS PERTENECIENTES A LA MATERIA ELECTORAL", y cuando veo yo, analizo esta tesis, pues me convence.-----



TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA GENERAL
DE ACUERDOS

Efectivamente, es un acto administrativo, no tenía duda, me convenció la tesis, además es una jurisprudencia, obligatoria, ya para que le doy de vueltas al asunto, fácil verdad, la misma ley de amparo me dice cuáles son los criterios que me obligan como juzgador a aplicar. Si pues, pero eso fue antes de la reforma de junio del 2011, que ahora como juzgador también me obliga a aplicar, hacer una interpretación conforme a lo que más beneficie al gobernado. -----

Un día antes de la sesión interna me di a la tarea, la necesidad de buscar, de estudiar, porque no estaba, de Derecho estaba convencido con la jurisprudencia, pero de hecho pensando precisamente en ese beneficio, en ese principio *pro persona*, me puse a indagar en la Sala Superior, qué había al respecto y encontré, primeramente, tres criterios y precisamente, tres precedentes de aquí de Michoacán, uno de ellos, de Zinapécuaro, otro de Uruapan, en donde se determina precisamente o más bien, entran al estudio, se declara competente la Sala Superior en materia electoral; y todo se derrumbó respecto a la jurisprudencia 91 del 2008, en donde se determinan que son actos administrativos. -----

Bueno, son tres precedentes, de tres magistrados, que sabemos no es la última palabra, estoy de acuerdo, no son el plus ultra los Magistrados, el actual Presidente Luna Ramos, Olimpo Nava, González Oropeza, pues, dije a ver, vamos a analizar y qué fue lo que ponderé, por un lado tenemos el interés del Presidente, por el otro lado tenemos a una serie de gobernados, ¿qué derecho vamos a ponderar?, un derecho o un conjunto de derechos. -----

De conformidad a la interpretación *pro persona* pues, voy a atender al principio y además, es constitucional y la interpretación conforme, pues me voy a los Tratados, me voy a los Tratados y veo que también está observada y que debemos acatar esa normatividad internacional, porque así lo acordó México y fue ratificado por el Senado, por lo tanto, y cuando se me, internamente, pues estos tres criterios no son, son precedentes, como pueque sí, pueque no, bueno, ahí ya nuevamente quedé en esa incertidumbre legal de la que estoy hablando. -

Pero, encuentras otro criterio, otro precedente de Morelos, del Estado de Morelos, en donde la Magistrada Carmen Alanís quien fue Presidenta de la Sala Superior, bueno pues ya están dos Presidentes, uno actual y una ex Presidenta, con el mismo criterio y en qué basan ese criterio los Magistrados, para entrar al estudio para poder determinar, si los actos que se están haciendo valer, que en este caso, los diferentes ciudadanos a través de esas demandas, son actos electorales o son actos administrativos. -----

Y yo creo que aquí se ventila algo, están haciendo valer derechos políticos-electorales, en dónde están consagrados, artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo tanto, esa determinación y hay una tesis de jurisprudencia en contradicción, si bien es cierto que es respecto a otro concepto, pero lo importante es la competencia, determinar la competencia, determinar si es un acto, es un derecho político electoral, así de sencillo y me inclino y me convence. -----

También estoy plenamente consciente y debemos estar conscientes, que este Tribunal del Estado, no tiene la competencia para conocer de éste tipo de demandas o de juicios, que en este caso sería un JDC, de la conformidad a la normatividad que nos rige, nosotros no conocemos de juicios de JDC ¿quién conoce?, la Sala Regional. La Sala Regional es la que conoce y precisamente en el asunto, en el caso de Zinapécuaro, ahí entró al estudio y resolvió en esa

ocasión la Sala Superior ¿por qué? porque todavía no estaba estructurada, instaladas las Salas Regionales y así se establece en el proyecto, por esta ocasión va a entrar al estudio la Sala Superior, en lo sucesivo serán las Salas Regionales las que conozcan de los juicios JDC. -----

Creo que ahí está muy bien claro, me queda bien claro, este Tribunal no, lo cual me da la pauta que quien debe conocer es la Sala Regional, es la que va a determinar en su momento e insisto, en esa interpretación, conforme y atendiendo a ese principio *pro persona*, pues yo me inclino precisamente para proteger esos derechos del ciudadano, de "x" cantidad que no es uno, no es el Presidente de Jiquilpan, bueno, que la Sala Regional determine, en este caso, si ella conoce, va a resolver; si no conoce y determina, como ha determinado en otros asuntos que sea este Tribunal, pues entraremos al estudio.-----

Aquí no se trata de resolver o de no querer resolver como el Tribunal Administrativo, ¡no! se trata precisamente, ese conflicto de competencias, de determinar quién debe conocer; y yo creo que si la Sala Regional determina que es el Tribunal Administrativo, adelante, aquí afortunadamente creo que no va haber, herir susceptibilidades de que, te voy a revocar, ¡no! me vas a orientar, me vas a determinar y se va a sentar un precedente, tanto para el Tribunal Administrativo como para el Tribunal Electoral y nos quitamos de conflictos de competencias, entonces yo creo que es, no es un voto en contra sin razón, incluso, respecto a la cuestión de los derechos político-electorales, cabe precisar que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, es procedente respecto de los conflictos derivados de las elecciones de jefes de tenencia como es, o encargados del orden municipal, como es lo que nos están poniendo sobre el escritorio en estas demandas, previsto en el artículo 124 de la Constitución del Estado de Michoacán de Ocampo, en concordancia con el artículo 60, 62, 119 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, cuando se aduzcan violaciones a derechos de votar y ser votado en razón de lo siguiente.-----

Es decir, por qué determino, por qué llegó a esa conclusión que es una violación de derechos político-electorales, precisamente haciendo una interpretación sistemática y funcional de los artículos 35, en sus tres primeras fracciones; 39, 40, 99, fracción V; 115, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 60, 62, permite considerar procedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano respecto de la elección, porque dicho juicio está dado para tutelar los derechos fundamentales de votar, ser votado y de afiliación frente a actos o resoluciones que los afecten, sin posibilidad para limitar su eficacia siempre que se trate de elecciones en las cuales los ciudadanos en uso de su potestad soberana, elijen funcionarios públicos para el ejercicio de facultades del poder soberano de mando y decisión, lo cual ocurre en el caso de los jefes de tenencia o encargados del orden municipales -el caso concreto nuestro-, cuando surgen procesos comiciales sustentados en el voto de la ciudadanía en conformidad con la ley aplicable, por ser servidores públicos con facultades de decisión en las comunidades de su jurisdicción, que incluso, pueden adoptar medidas de policía a electo a corregir cualquier alteración al orden público.-----

De modo que al ser uno de los canales a través de los cuales, la ciudadanía participa, por conducto de sus representantes libremente elegidos en la dirección de los asuntos públicos, los conflictos derivados de tales elecciones en que se aduzca la violación de los derechos político-electorales del ciudadano, son

objeto de tutela por la jurisdicción electoral, en efecto, en el artículo 99, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establecen las bases del juicio para la protección de los derechos político-electorales y se prevé como supuesto de procedencia, la impugnación de actos y resoluciones violatorias de los derechos político-electorales del ciudadano de votar, ser votado y de afiliación, sin establecerse limitación alguna sobre el tipo de elección en la cual serán objeto de tutela ese tipo de derechos, pues se trata de derechos fundamentales, lo cual exige la búsqueda de su más amplia protección y optimización.-----

Por otra parte, el artículo 35 Constitucional, en sus primeras tres fracciones, prevé los derechos político-electorales del ciudadano de votar en las elecciones, ser votado en las mismas y asociarse para tomar parte de los asuntos políticos del país, se trata pues de manifestaciones del derecho ciudadano de participar en la dirección de los asuntos públicos, consignado en distintos pactos internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.-----

Pues yo considero, no hay una confusión de mi parte en el sentido de que la elección de Jefes de Tenencia, si bien es cierto que está normada en una ley administrativa municipal, bueno pues vamos a ponderar, vamos a ponderar y yo considero que tampoco de mi parte hay confusión respecto al plebiscito, que pudiéramos decir, el plebiscito municipal es diferente al plebiscito que consagra la Constitución, no, pues vámonos por el artículo 35 de la Constitución, votar y ser votado, es un derecho político-electoral, en mi opinión, como dijo Luis Echeverría: "ni lo afirmo ni lo niego", que me lo clarifique la Sala Regional, creo que tenemos esa oportunidad, ya para no cansar más, creo que todos conocemos qué es el plebiscito ¿verdad?-----

Artículo 8° de la Constitución del Estado de Michoacán, los derechos de los ciudadanos, votar y ser votado en las elecciones populares, participar en los procedimientos de referéndum, plebiscito e iniciativa popular, artículo 8° de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, yo creo que ahí ya me está clarificado aún más, por lo tanto, voy a concluir y es la razón por la cual no estoy de acuerdo con el sentido y decisión del acuerdo y en mi opinión, respetando la de mis compañeros Magistrados, en mi opinión, este asunto debe enviarse, reencauzarse a la Sala Regional para no violentar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Gracias.-----

MAGISTRADA PRESIDENTA MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ.- Gracias Magistrado González Cendejas. ¿Alguna otra participación? Sí Magistrado Sánchez García, adelante.-----

MAGISTRADO ALEJANDRO SÁNCHEZ GARCÍA.- Gracias Presidenta. Anuncio que no estoy de acuerdo con el sentido y lo digo con pleno respeto y voy a dar las razones por las cuáles no.-----

De entrada, cuando llegan los asuntos, aparentemente, pudiesen considerarse lisa y llanamente de índole administrativa, ¿por qué razón? porque pareciese que se trata simplemente de un acto de esta naturaleza, porque se está en presencia de una manifestación unilateral externada por una autoridad de carácter administrativo, como lo es el cabildo municipal, mismo que en sesión pública expresó su decisión en ejercicio de la potestad pública de la cual está investido, para poder hacer una designación en un área geográfica o

demarcación territorial de tenencia, y la expresión de la voluntad legal de la autoridad es sin duda el acto administrativo. -----

Viéndolo desde esta óptica, pues sí es administrativo ¡cómo no!, ¿tenemos un Tribunal Contencioso Administrativo? sí, pareciese que le corresponde al Tribunal Contencioso, pero si analizamos más a fondo esta causa, ¿qué es lo que realmente quiere la persona o las personas que concurren con la inconformidad que se plantea y que nos llegó por parte del contencioso administrativo? Bueno, que haya una elección, o sea, el origen sí es un acto administrativo, no tengo duda, pero cuál va a ser la consecuencia final: la elección.-----

Al hablar de elecciones advierto un acto de naturaleza electoral, entonces, me pongo a analizar la legislación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que fue quien remitió los expedientes y advierto, efectivamente ellos pueden anular un acto de esta naturaleza, pero no encuentro en su legislación que puedan ordenar tajantemente, como debe de ser, que se convoque a las elecciones que se lleve a cabo el respeto el derecho político-electoral, porque no es la naturaleza de la creación del Tribunal Contencioso Administrativo.-----

Puede parecer entonces aquí que estamos divididos entonces en dos actos, yo le llamaría con palabras muy coloquiales, este Tribunal tiene dos candados: el primero, de un orden legislativo que no nos permite entrar a conocer este tipo de cuestiones, que ya lo expresó muy bien el Magistrado González Cendejas, pero el segundo, que es un acto de naturaleza administrativa, pero al final de cuentas, en qué va a concluir: en una elección, y yo me pongo a pensar también y después de pensar las posibles circunstancias que pudiese resolverse por el área administrativa, ¿qué es lo que se puede ordenar?, resuelve conforme a derecho, encuentro en la legislación aplicable y me refiero a la orgánica municipal, que hay varias maneras de resolver, incluso, se puede correr el riesgo de que se dicte un acto igual de naturaleza administrativa, pero que no cumpla a cabalidad el otorgar el derecho político-electoral, ya esto me obliga, a analizar los Tratados de la Convencionalidad Interamericana, lo que hoy llaman, 'potencializar los derechos', bueno, yo como tribunal no tengo el mecanismo, porque el creador de la norma, que es el Congreso del Estado, no los dio, por lo que se gusta y se mande, no se cuestiona al Congreso, pero el senado de la República signó el tratado que ya ha mencionado el Magistrado Fernando, los tratados internacionales para potencializar los derechos, ¿dónde se le da la potencialización al derecho y dónde cumplimos el pacto?, pues a través de una remisión al que tiene la ventanilla, es decir, la facultad legal, que es la Sala Regional.-----

Y la Sala puede, sin prejuzgar lo que vayan a determinar, o abordar el fondo del asunto y determinar la nulidad del acto que está impidiendo convocar las elecciones que se establecen o, en su caso, darnos la facultad, pero ya con un mandato federal a través del sistema federal mexicano que estaríamos respetando en un sistema formalista, voy a llamarlo así porque no podemos ahorita salirnos del marco de la ley, en este sentido ni podemos hacer una norma para nosotros, ser demasiado garantistas porque estaríamos excediendo nuestras funciones, pero ya con una instrucción que llegase vía resolución de la Sala, entonces podríamos, si es el caso, abordar el estudio.-----

Estos argumentos que estoy viendo aquí, ¿por qué los anuncio como razón de mi voto?, el expediente o los expedientes, que fueron dos, se me turnaron oportunamente por el Magistrado Jorge Alberto Zamacona, un 19 de septiembre,

si mal no recuerdo, ya tiene algún rato que se nos turnaron a todos, no se llevó una sola sesión, fueron varias sesiones, si mal no recuerdo creo que dos o tres, en las que se abordaron estos temas, para poder llegar a alguna conclusión y en una de estas pláticas, no pláticas, en una reunión interna de Pleno, yo propongo que se hiciese un requerimiento ¿para qué?, pues para pedirle al Tribunal Contencioso, oye infórmanos, ¿tienes más asuntos, vas a conocer en su caso de más asuntos, o no?, bueno, se estima que no es necesario el requerimiento, en el concepto del de la voz, es totalmente indispensable el requerimiento.-----

Entonces, voy a entrar a conocer un asunto donde siento que le falta un requerimiento, creo que lo tengo que abordar, si el ponente estima que estos son los elementos consustanciales para resolver, sin crítica alguna tengo que abordar el asunto con los elementos que tengo, con estos elementos, empiezo a profundizar sobre lo que ya establezco y advierto, precisamente, lo que ya refería del acto administrativo, del acto electoral, entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros como Tribunal Electoral?, bueno, yo partiría de una cuestión básica, el derecho es la teoría, la teoría que se debe aplicar a los hechos, ¿qué son los hechos?, son los actos acontecidos que quedan firmes en la historia del suceso, si las teorías hoy pudiesen refutar los hechos, la ley quedaría sin efecto, es el hecho el que refuta la teoría, es el hecho que estamos en presencia de una petición que inicia como un acto administrativo, concluye con que se convoque una elección, para que en esa comunidad donde viven esas personas en el territorio michoacano se lleve a cabo un acto electivo, un acto de elecciones.---

Estos hechos que estoy narrando, a través del análisis de las teorías que me permiten advertir estos dos candados que ya mencioné, no me dejan solo en esa consideración, porque sería entonces simplemente, regresar al Tribunal Contencioso, oye, no tengo esta facultad, prácticamente decir, quita el candado y lo que sea electoral, regrésamelo; no podemos, los Tratados Internacionales que no son nuevos en México y que son parte de la ley suprema, es lo que me permite, como decía, advertir que desde dónde este Tribunal puede potencializar el derecho y no que sea el Tribunal quien los potencialice, sino, cumplir precisamente con los acuerdos internacionales, bueno, enviándolo a la Sala.---

Ya tengo más argumentos, sobre imperio de la ley, gobierno de la ley, regla de la ley y vistos a la inversa, es decir, no ha nacido el acto como administrativo, lo volteo, digo, ¿qué quieres?, como si naciera, que se te violó la elección y veo la demanda o las inconformidades entendidas desde la inversa, como si llegaran diciendo, oye, quiero ser elegido y se me privó de ese derecho porque, se dictó por la autoridad un acto que no tiene facultades él para dictar, porque me bloquea el canal constitucional de derecho a las elecciones, el invertir este sentido de como se planteó las argumentaciones en los expedientes, es lo que permite llegar a la consideración de que no estaría yo de acuerdo en el proyecto porque despotencializaríamos esos derechos.-----

No abundo más Presidenta porque el Magistrado González Cendejas ya dijo cuestiones que yo repetiría, que él las dijo muy bien y por respeto al Pleno y a continuar con la sesión. Muy amable, gracias.-----

MAGISTRADA PRESIDENTA MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ.- Gracias Magistrado. ¿Alguna otra intervención? Bueno, si no hay más intervenciones, yo haría uso de la voz de manera muy breve, eso espero, para manifestar también, en principio y previo a señalar, que con absoluto respeto al ponente, sobre todo considerando y destacando que precisamente las bondades de un órgano colegiado es eso, las deliberaciones, las discrepancias que finalmente vengán a enriquecer una u otra postura.-----

Yo lo mismo que los Magistrados que ya me han antecedido en el uso de la voz, también me apartaría tanto del sentido como de los argumentos que se contienen en el proyecto que se nos circuló, en los proyectos circulados.-----

Como un primer punto, yo diría que no comparto el hecho de que se acumulen en dos bloques los expedientes, en mi opinión hay coincidencia en la pretensión, hay coincidencia en la causa de pedir, hay coincidencia en las partes y por lo tanto al haber conexidad en la causa, mi propuesta sería que se acumulen en uno solo, una vez dicho esto, voy al tema del contenido del proyecto.-----

Creo que para entender a cabalidad de lo que estamos tratando, voy a ser breve, una brevísima referencia a de qué se trata. ¿Qué fue lo que se impugnó ante el Tribunal de Justicia Administrativa?, como ya escuchamos en la cuenta que acaba de dar de manera muy brillante la Secretaria de Estudio y Cuenta, se trata de 42 asuntos, que en este Tribunal se registraron como asuntos especiales, en los que 42 ciudadanos acudieron por su propio derecho ante el Tribunal de Justicia Administrativa, a inconformarse en contra de la determinación del Ayuntamiento de Jiquilpan, en el que se designó como Jefe de Tenencia a Pedro Rojas López.-----

A Pedro Rojas López, se le designa como Jefe de Tenencia de San Martín Totolán, derivado de la renuncia que en su momento presentara el entonces Jefe de Tenencia. Inconformes con esta decisión varios ciudadanos acuden al Ayuntamiento y expresamente al Presidente Municipal le piden que deje sin efectos esa designación y que convoque a elecciones, conforme a lo que establece la Ley Orgánica Municipal. En respuesta a esta petición, el Presidente Municipal les dice: "Bueno pues, yo no soy competente para dejar sin efectos una determinación del Cabildo, y por lo tanto, como ya se atendió esa petición de designar al Jefe de Tenencia en la sesión de cabildo "X", ya se atendió esa petición y por lo tanto, ya es cosa juzgada y por eso no es necesario convocar", --super argumento, no--.-----

Ahora, ¿qué pasa con posterioridad, bueno, qué demandan o cuál es la causa de pedir? Yo creo que el punto clave de este asunto, que por cierto debo señalar es un asunto muy interesante, un precedente muy importante para el Tribunal Electoral de Michoacán, porque, bueno, esperemos que con esto se venga aclarar las dudas que existen todavía en algunos casos que no debieran, de si estamos en presencia de una cuestión electoral o no.-----

Insisto, se trata de un asunto muy interesante, muy bonito. La pretensión concreta de los ciudadanos es, como ya decía yo, que se deje sin efectos esa *designación* de Jefe de Tenencia y quiero destacar el término *designación*; ¿quién hizo la designación? El Cabildo, por mayoría y ¿cuál es la causa de pedir? La causa de pedir, clarísima de todos los ciudadanos, es porque de manera ilegal el Cabildo designó a un funcionario que no debe ser designado sino electo, electo a través de una convocatoria que expida el Ayuntamiento del Municipio; elección que debe llevarse a cabo de manera directa, personal y secreta.-----

Pero, como no se hizo de manera correcta o legal, dicen los ciudadanos, pues se violan sus derechos, sus derechos políticos-electorales a elegir a sus Jefes de Tenencia. Frente a estos planteamientos ¿qué dijo el Tribunal Administrativo? En esencia el Tribunal de Justicia Administrativa, dice: "Este Tribunal es incompetente porque se trata de una cuestión electoral, que lleva inmerso a la

violación a derechos político-electorales, pero que además deriva de un, -se refiere a -un plebiscito que está regulado en una Ley de Participación Ciudadana, cuya competencia corresponde al Tribunal Electoral". -----

Comparto, en parte, esta determinación del Tribunal de Justicia Administrativa, en parte solamente, a partir de ahí, qué se nos está planteando en el proyecto sometido a consideración del Pleno, en conclusión, que se declare incompetente al Tribunal y se regresen los autos al Tribunal de origen, para que sean ellos los que conozcan y resuelvan o para los efectos legales conducentes, perdón, pero en síntesis es para eso. Pero ¿cuáles son los argumentos?, los argumentos del proyecto son varios: Primero, que lo que se pretende es la nulidad, lisa y llana, del nombramiento de Pedro Rojas López como Jefe de Tenencia, pero que la designación -dice el proyecto-, la designación del Jefe de Tenencia, en el caso concreto, no constituye un asunto en materia electoral, pues no se impugna a través del procedimiento adecuado un cargo de elección popular, ese es uno de los argumentos; otro de los argumentos es, que las únicas autoridades que son designadas vía elección popular son: el Presidente Municipal, Síndico y Regidores; y, que es atribución de los Ayuntamientos emitir normas de observancia general tendientes a regular, entre otras materias, la participación ciudadana. -----

También se señala que en la parte conducente, bueno, la Ley Orgánica establece que el procedimiento de elección, aquí ya hablamos de elección, primero hablamos de designación luego hablamos de elección, es por vía de plebiscito, luego volvemos a señalar, es indudable que el proceso de designación del Jefe de Tenencia, no puede bajo ninguna circunstancia, considerarse como comicios electorales, sino que es un acto meramente administrativo y también se señala que de ninguna forma resulta que el Jefe de Tenencia sea integrante del Ayuntamiento, que dichos procesos de selección no se rigen por los principios que rigen la materia electoral, es decir, los principios de selección de Jefes de Tenencia, y también citamos una tesis que habla de que las normas generales en materia electoral, para que puedan considerarse con tal carácter, deben impugnarse a través de la acción de inconstitucionalidad y que deben regular aspectos relativos a los procesos electorales previstos en la Constitución. -----

Hacemos una distinción de lo que es el plebiscito, el referéndum y por supuesto se cita como sustento esencial la tesis que ya mencionaba el Magistrado González Cendejas, contencioso-administrativo, el juicio relativo es procedente en contra actos de los ayuntamientos vinculados con la elección de miembros de los Consejos de Participación Ciudadana, previstos en la Ley Orgánica del Estado de México, al no tratarse de comicios pertenecientes a la materia electoral. -----

También se habla de que bueno, al no actualizarse ninguno de los supuestos de procedencia de los medios de impugnación que prevé nuestra Ley de Justicia Electoral y Participación Ciudadana, nos lleva a que seamos incompetentes en la materia, y decía yo que lo principal es determinar con claridad, primero la pretensión y luego la causa de pedir, y lo decía de esta manera porque, insisto, porque primero, creo que se parte de una premisa inexacta porque los Jefes de Tenencia no se designan, se eligen, se eligen a través de un proceso de elección directa, personal y secreta, incluso se exige la presentación de una credencial de elector. A los Jefes de Tenencia les son aplicables muchas reglas similares a los funcionarios de elección popular, por ejemplo, no son reelegibles,

es decir no se pueden reelegir para el siguiente período, reciben una remuneración y desempeñan funciones importantes para el municipio. -----

Pero, principalmente, lo que a mí me lleva a concluir y a coincidir en que se trata de una cuestión en materia electoral y en esta parte es lo que yo no compartiría lo que se estableció en el Tribunal de Justicia Administrativa, de que sea porque se regule, sea una elección que se lleve a cabo a través de una figura que regula la Ley de Participación Ciudadana, ¡No!, para mí la razón que nos lleva, o me lleva a la convicción que estamos frente a una cuestión electoral, es que si bien es cierto se trata de un acto formalmente administrativo, porque deriva de una autoridad administrativa y de una ley administrativa, como ya lo mencionaba el Magistrado González Cendejas, lo cierto es que materialmente es un acto electoral, porque en esencia lo que se está alegando es, que con ese acto se vulneraron derechos político-electorales de los habitantes de San Martín Totolán.-----

¿En qué consistían esos derechos? En votar y elegir a su Jefe de Tenencia, pero más aún, la tesis que se invoca como base del criterio que se está asumiendo en el proyecto circulado, no es aplicable a nuestro caso, porque si revisamos la legislación del Estado de México y hacemos una comparativa con la nuestra, veremos que los Consejos Ciudadanos no tienen la misma calidad que los Jefes de Tenencia, incluso allá también hay funcionarios que tienen el mismo, la misma función que los Jefes de Tenencia, y en ese sentido la Sala Superior y la Sala Regional en varios precedentes ya han establecido que se trata de cuestiones electorales y que por lo tanto, deben impugnarse a través de las vías electorales. Eso por un lado, pero además, dice, esa tesis no nos obliga, pero aún más, lo mencionaba el Magistrado, esa tesis es de 2008, de 2008 a la fecha todos sabemos, tenemos, hemos tenido una evolución importantísima, sobre todo en el tema de protección de Derechos Humanos, prueba de ello es la reforma al artículo primero constitucional, que nos obliga a difundir, proteger, salvaguardar los Derechos Humanos, dentro de estos Derechos Humanos, por supuesto está por un lado, el acceso a la justicia y por otro, los derechos político-electorales, pero, no sólo eso, yo creo que también el tema que está sobre la mesa, nos permite ser congruentes con lo que este Tribunal ha venido difundiendo a lo largo de esta integración, por un lado, los criterios garantistas del Tribunal y por otro lado, el ser congruentes con la protección efectiva de los Derechos Humanos.-----

Entonces, ya tenemos por un lado, la tesis no nos obliga, porque no es aplicable al caso concreto, por un lado, pero por otro, incluso ya hay un criterio que ha superado esa tesis de la Sala Superior, a través de una contradicción donde ha dicho: *esa, ese criterio ya no, ya no es aplicable*. ¿Por qué?, porque ya no es acorde al nuevo paradigma de protección de Derechos Humanos.-----

Entonces, esa es una de las principales razones por las que yo no coincido y sobre este tema hay una infinidad de precedentes jurisprudenciales, precedentes aislados, criterios incluso a la misma Corte en el sentido de que todas las cuestiones que deriven de la elección de autoridades auxiliares municipales, no solo en Michoacán, en Morelos, Oaxaca, Chihuahua, en varios estados, deben estar bajo la tutela de la jurisdicción electoral y tan sólo como en vía de orientación, voy a dar lectura, muy, muy breve a un criterio que tenemos aquí.- Dice uno de los precedentes, en lo que nos interesa, "...la circunstancia de que los procesos comiciales puedan estar o no regulados de manera expresa en un ordenamiento electoral, en modo alguno significa que se dejen de aplicar o que se desconozcan los principios que rigen los procesos electorales en general,

TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA GENERAL
DE ACUERDOS

entre ellos, la certeza, definitividad, ya que lo que otorga una norma o un acto de naturaleza electoral se define a partir del objeto de que la misma regula". -----

Entonces, desde aquí ya estaríamos teniendo un criterio distinto a lo que sostenemos en el proyecto. Entonces, dice este precedente: "Son aplicables a las elecciones constitucionales, estatales y municipales, como a los comicios que se celebren para elegir otra clase de autoridades como son: delegados, subdelegados municipales, en la medida que el legislador ha determinado que el acceso a esos cargos debe ser a través del voto ciudadano, es decir, con base en la voluntad ciudadana que se sustenta en la soberanía nacional. Por identidad deben observarse los principios de certeza y definitividad a las elecciones que se celebren para nombrar a los delegados y subdelegados municipales, en tanto su designación radica en la recepción del voto popular, -que es lo que ocurriría aquí en el caso que nos ocupa-, así cuando se controvierta la legalidad de actos desarrollados en procesos electorales como sean constitucionales o para elegir otro tipo de autoridades, como auxiliares municipales, se trata de materia electoral", así lo sostuvo la Sala Superior en varios precedentes y se cita uno el 895 de 2013. -----

Y finalmente, ya nada más como para cerrar mi intervención, voy a citar un precedente, es de 2013, de septiembre precisamente. Se analiza, ahí se está impugnando una, también una designación de auxiliares municipales y al analizar la naturaleza del acto impugnado dice: "el actor aduce que la naturaleza del acto que cuestionó es una convocatoria para funcionarios municipales, se trata de un acto administrativo al haberse emitido por el cabildo -más o menos lo que ocurre aquí- por tanto, el actor considera que la legislación local en materia administrativa era la aplicable, atendiendo a la naturaleza del acto a partir de la premisa apuntada, esto es, el acto controvertido debió ser materia de conocimiento de un Tribunal Administrativo". -----

Desde esa perspectiva considera que la demanda interpuesta se realizó dentro de un, fuera de plazo; el inconforme aduce que no se debió aplicar la Ley de Justicia Electoral; y qué dice la Sala, dice: "En el presente asunto, consiste en determinar, la litis a determinar, consiste, si como lo afirma el actor, la sentencia emitida por el Tribunal del Estado de México, vulnera sus derechos político-electorales al haber desechado un recurso por ello, es preciso considerar que el actor formula planteamientos tendientes a evidenciar que no se debió aplicar esa norma. -----

Además, sostiene que la legislación del Estado de México no confiere facultad para conocer del asunto, en ese sentido, se advierte que el inconforme cuestiona la competencia de la autoridad a través de afirmaciones relacionadas con la competencia atendiendo a la naturaleza del acto y la otra, por la falta de disposición expresa. De tal manera que si la competencia constituye un presupuesto, bueno, se debe analizar de oficio", y dice la Sala, de acuerdo con la metodología vamos a analizar la naturaleza del acto, que era una convocatoria, y dice que según el actor, se trata de un acto administrativo al haberse emitido por el Cabildo de conformidad con el artículo tal del Código Administrativo. Los motivos devienen infundados; en primer término, es necesario señalar que aun cuando los actos de autoridad pueden verse en dos vertientes, formal y material, y pudiese considerarse que el acto reclamado puede reputarse como formalmente administrativo, al haberse emitido por un Cabildo, tales criterios de clasificación no son los que determinan, menos aún por si mismos la competencia judicial para su impugnación y/o las leyes aplicables; en el caso, conviene reiterar que desde la primera instancia se

impugnó una convocatoria y se aducía, lo mismo que en este caso, que con ello se impedía su derecho a votar por las autoridades auxiliares municipales. -----

A partir de lo anterior, la Sala considera que la pretensión del actor debe entenderse referida a materia electoral, pues se reitera, la pretensión es cuestionar la referida decisión municipal, es decir, aquella que impide ejercer su derecho al voto para elegir a diversos representantes del municipio de Naucalpan, esto es, viene haciendo valer que se le había privado de su derecho a votar y que estas votaciones son típicamente casos que se judicializan en la vía electoral. La naturaleza de este litigio deriva también de las características de los procesos de elección, que en ella se previeron. Por un lado, la jurisprudencia 9 de 2013 de la Sala Superior y otros criterios de la Salas del Tribunal Electoral.

Los actos de organización y los procedimientos selectivos de las autoridades auxiliares, son de naturaleza electoral, eso dice esta tesis, y si bien dicha jurisprudencia no se refiere a los casos de los Consejos de Participación Ciudadana, como se impugnaron en conjunto varias elecciones, por eso se analiza, porque acuérdense que yo señalaba que los consejos no ejercen las mismas funciones que los Jefes de Tenencia.-----

Y en ese sentido dice la Sala no se inadvierte la jurisprudencia 2 de 2008, que es la que se cita en el proyecto sometido a consideración del Pleno, no pasa inadvertido para la Sala que hay un criterio obligatorio que establece que el Contencioso Administrativo, es el juicio relativo o procedente contra los actos de ayuntamientos vinculados con la elección de miembros de los Consejos de Participación Ciudadana. Sin embargo, dice la Sala, considera que dada las circunstancias del caso, como ya se explicó, la naturaleza electoral de autoridades auxiliares es extendible al proceso de elección de los auxiliares, además, en todo caso —y esto es muy interesante—, la jurisprudencia citada debe verse a la luz de los desarrollos legales y jurisprudenciales que han acercado a los procesos de participación ciudadana y a la elección de estos organismos más a la materia electoral que a la administrativa.-----

Se destaca al respecto, que cuando se emitió la jurisprudencia no había sido emitido el Reglamento del Estado de México, y yo diría, no había sido aprobada la reforma al Artículo 1º constitucional. En la misma tónica la Sala Superior en una contradicción de criterios 2 de 2013, que dio origen a la jurisprudencia 9, establece, que para efectos judiciales el hablar de los procesos electorales se refiere a todo proceso electivo en que participen los ciudadanos mediante el sufragio personal, directo, como lo es la elección de autoridades auxiliares, independientemente del sesgo administrativo que pudiera tener la convocatoria, la autoridad que lo emitió. Lo cierto es, que el caso es más trascendente y relevante para determinar la naturaleza del juicio: la pretensión de fondo, que subyace en el juicio y que se refiere al ejercicio de un derecho eminentemente electoral. Y por lo tanto, la Sala determina que es una cuestión eminentemente electoral.-----

Por esa razón es que yo coincido con este criterio y considero que ciertamente, no obstante que se trata de un oficio y de una acta de cabildo, se trata de un acto electoral porque lo que está, o lo que da sustento a la impugnación o la inconformidad de los ciudadanos, es la violación a su derecho a elegir a los Jefes de Tenencia.-----

Sin embargo, tampoco pasa inadvertido para nosotros o para la que habla, que lamentablemente el Tribunal Electoral no cuenta con un JDC local, es decir, no

tenemos una vía expedita para entrar al fondo del asunto, no obstante que es competencia electoral, eso quiero que quede muy claro, que yo creo que es competencia electoral, sin embargo, a diferencia de otros estados, en lo que sí se prevé, a lo mejor no expresamente un juicio de la protección de los derechos político-electorales, sin embargo constitucionalmente sí se confiere al Tribunal Local, la facultad de proteger esos derechos aunque no haya un mecanismo concreto, nosotros no lo tenemos, y esa es la única razón por la que yo sería de la idea de que al encontrarse que se trata de materia electoral y que el Tribunal de Michoacán, no cuenta con un medio de control local para abordar el estudio del fondo se remita, a la brevedad, a la Sala Regional para que en su caso sea lo que determine la que determine lo que sea conducente.-----

Tampoco debemos pasar por alto que de regresar el asunto al Tribunal de Justicia Administrativa, estaríamos generando un conflicto competencial que, quién resolvería, allá un ponente ya se declaró incompetente, quiero pensar que ese acuerdo ya quedó firme o no sé si se haya impugnado; nosotros como Pleno le regresaríamos el asunto al otro Pleno y le diríamos: "tú eres competente", creo incluso podríamos invadir esferas competenciales, o por otro lado yo no sé si el Pleno, entiendo que no, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa esté facultado o tenga competencia para revocar un acuerdo de uno de sus integrantes.-----

Entonces, mientras todo esto pasa, pues en medio están los ciudadanos y en ese conflicto, pues estamos haciendo nugatorio su derecho humano, de acceso efectivo a la justicia. Por esa razón, insisto, mi postura es: primero, debe acumularse en un solo expediente al existir identidad de la pretensión, causa de pedir y partes; y, por otro lado debe remitirse a la Sala Regional para que determine lo que sea conducente.-----

Sería lo que yo tendría que agregar, no sé si haya alguna intervención. Adelante Magistrado Zamacona Madrigal.-----

MAGISTRADO JORGE ALBERTO ZAMACONA MADRIGAL.- Gracias Presidenta. Intentaré ser breve, yo creo que rápido me voy a acostumbrar, al paso que vamos, rápido me voy a acostumbrar. Dicen por ahí que la cuenta fue muy clara, cuestión que comparto en este caso, la cuenta fue muy clara, mas sin embargo considero conveniente hacer dos o tres observaciones, en base a los argumentos que se han vertido.-----

Empezaría diciendo, que en mi concepto el acto que está sobre la mesa impugnado por los 42 ciudadanos, por los 42 justiciables, es de naturaleza netamente administrativa, y muy bien lo decía la Magistrada Presidenta, no estamos en presencia de una elección, estamos en presencia de una designación, que si me permiten la connotación, una decisión arbitraria del Cabildo. Consecuentemente al ser la base administrativa, para mi gusto, lo demás corre la misma suerte y trataré de explicarme, incluso, un poco más.-----

Hoy en día sabemos nosotros que se habla mucho y lo ha puesto sobre la mesa el Pacto por México, de la centralización judicial o jurisdiccional, cuestión con la cual la mayoría de los Magistrados y Jueces Locales no estamos de acuerdo, yo, me cuento entre ellos, no estoy de acuerdo con la centralización judicial o jurisdiccional. De hecho si lo recordamos el día viernes estuvimos presentes en una interesante mesa redonda denominada "Democracia Representativa Electoral en México, Federalista o Centralista", creo yo, que en los hechos, actualmente, vaya, hoy por hoy en el Estado de Michoacán, y esto lo digo con

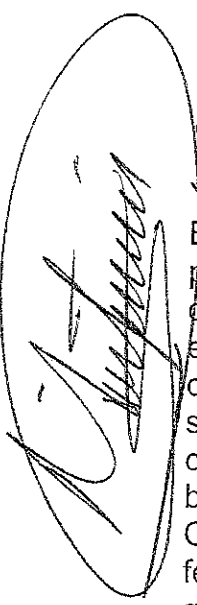
todo respeto y a título personal, el Honorable Congreso del Estado se ha quedado corto en la legislación de algunos temas, específicamente de control constitucional, no sólo en materia electoral, sino en todas las materias obviamente, en aspectos locales o estatales, creo yo que el Congreso del Estado, insisto, lo digo respetuosamente tiene algunas asignaturas pendientes para tutelar derechos humanos a nivel local, sin perjuicio de los medios de control de la constitucionalidad que sabemos existen a nivel federal.-----

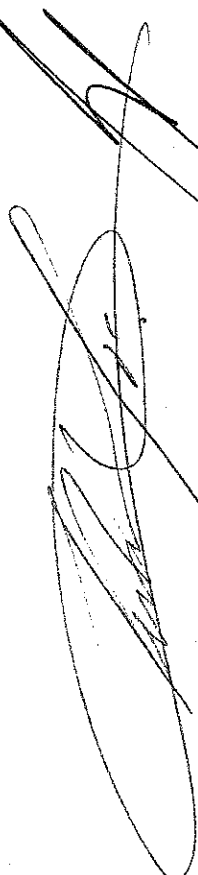
Sin embargo, no dejo de reconocer y esto hay que apuntarlo muy bien, no dejo de reconocer los importantes esfuerzos que ha hecho nuestra máxima soberanía en el estado en las últimas legislaturas, en donde ha dado a los ciudadanos michoacanos una serie de medios de defensa e instrumentos para tutelar sus derechos, entre ellos de muy reciente creación, el Tribunal de Justicia Administrativa, que si me permiten traer a colación el artículo 95 de la Constitución del Estado de Michoacán, establece que: "El Tribunal de Justicia Administrativa será órgano autónomo, independiente en sus resoluciones y de jurisdicción plena en materia administrativa, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad, tendrá competencia para dirimir resolviendo en forma definitiva las controversias que se susciten por actos u omisiones de naturaleza administrativo-fiscal, entre el Ejecutivo, los Ayuntamientos, los organismos autónomos, las entidades u organismos descentralizados o desconcentrados, estatales o municipales y los particulares, la ley determinará atribuciones y procedimientos al tenor de la presente Constitución", fin de la cita.-----

Considero yo que en el Estado de Michoacán, hoy por hoy, existe un medio de defensa por virtud del cual los ciudadanos michoacanos pueden ir válidamente a impugnar acuerdos o resoluciones de las autoridades administrativas, en este caso entiéndase Ayuntamiento, por virtud del cual consideren violados sus derechos. Hay una instancia estatal, considero que no es forzoso o no es indispensable recurrir a una instancia federal para que se aclare el asunto, el proyecto si lo leyeron con calma no está proponiendo que se le regrese al Señor Magistrado que se declaró incompetente, sería absurdo, él ya no tiene jurisdicción para resolver este asunto, él ya lo resolvió lo que consideró conveniente, se está proponiendo que se regrese a la Sala Colegiada del Tribunal de Justicia Administrativa, que es lo mismo que el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, que conociendo la ley, veremos que es el superior de los Magistrados, más o menos como opera aquí, en cuanto a que el Pleno del Tribunal es la máxima autoridad del Tribunal Electoral.-----

Consecuentemente, al ser un acto de naturaleza administrativa, por un lado, en mi concepto, y al haber un medio de defensa idóneo para que el gobernado en términos del artículo 17 Constitucional y potencializando esa prohibición de la autodefensa y ese ordenamiento de que los Tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y condiciones que la ley establezca, considero, y por ello sostengo los proyectos sometidos a la consideración, considero que es el Tribunal de Justicia Administrativa en Pleno, el que debe de resolver si cuenta con la atribución o no, por ahí se decía y cuestión que yo obviamente jamás podría estar de acuerdo, que la Sala Regional en un momento a lo mejor resuelva la competencia en favor de la Justicia Administrativa, y lo resuelva para la resolución, yo creo que la Sala Regional, en este caso Toluca, no puede tener injerencia en la Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, y ojalá que no la tenga, porque si la tiene caramba, vamos a empezar a ver como el centralismo nos va a comer mucho más de lo que estábamos pensando que nos iba a comer.-----

TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA GENERAL
DE ACUERDO 29

 Yo considero pues, ya para concluir, que en el caso concreto toda vez que en el Estado de Michoacán a través de su poder revisor de la Constitución, de su poder constituyente permanente, estableció medios idóneos para resolver conflictos, en este caso entre particulares y el Ayuntamiento, debe de quedarse en Michoacán, ante autoridades michoacanas, para que éstas resuelvan lo conducente, sin olvidar como decía en mi anterior intervención, que tenemos un sistema federal en donde eventualmente pueden los asuntos, efectivamente, concluir ante autoridades federales y nada tiene de malo, esa es una de las bondades del sistema federal, que en los términos del artículo 124 de la Constitución, todas las facultades que no estén conferidas a los funcionarios federales, se entiende que se la reservaron los estados, efectivamente yo creo que aquí Michoacán se quiso reservar una facultad de resolver ese tipo de controversias y al declarar la nulidad de la designación, que no elección, de la designación de Pedro Rojas López, como Jefe de Tenencia, eso, por obvias razones traería como consecuencia el derecho de que se haga una nueva designación en los términos que la Ley Orgánica Municipal y principalmente la Constitución Política del Estado de Michoacán establezca. -----


 Por tanto, insisto, que sostengo el criterio sostenido, creo yo que no hacerlo de esa forma, nos llevaría a pensar que estaríamos ante una renuncia de que nuestras autoridades locales, nuestras autoridades estatales resuelvan cuando sea procedente los asuntos que son competencia de la autoridad estatal y eso en mi concepto podría incluso ir abonando de una manera interesante a la centralización de la cuestión jurisdiccional en el Estado de Michoacán.-----

Por tanto, desde este momento y en términos de que considero que será rechazado en el momento de la votación en el proyecto, anuncio que emitiré voto particular. Es todo Magistrada Presidenta, muchas gracias.-----

MAGISTRADA MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ.- Gracias Magistrado. ¿Alguna otra intervención? Si Magistrado.-----

MAGISTRADO FERNANDO GONZÁLEZ CENDEJAS.- Nada más para insistir, que considero pertinente que sea un sólo proyecto.-----

MAGISTRADA PRESIDENTA MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ.- Adelante Magistrado.-----

 **MAGISTRADO ALEJANDRO SÁNCHEZ GARCÍA.-** Gracias Presidenta. No es en afán ni en respuesta del Magistrado Jorge Zamacona a su disertación, que simplemente yo advierto que México siempre ha sido centralista, lo aceptemos o no lo aceptemos, el Acta Constitutiva del 24, no la crean los estados como en la unión americana, las 13 colonias; la crea el estado centralizado de México, reconociendo a los estados o provincias hoy llamados estados locales, pues hemos sido centrales desde siempre; el artículo, no recuerdo si el 90, de la Constitución Federal, establece la administración centralizada federal.-----

Entonces, el ver si se va a centralizar el poder que tienen los órganos jurisdiccionales para emitir una sentencia o no, es una cuestión que no nos puede preocupar, no nos debe preocupar y ¿porque lo digo?, aún y cuando digamos que no, si el Congreso así lo determina, así será y estos artículos fundamentales de la creación del acta del estado federal mexicano desde 1824 a la fecha, no han sido modificados, cuál es nuestra distinción, que somos un centralismo con un Presidente, a diferencia de Francia de un centralismo con un

C.N.
Primer Ministro o Inglaterra, el presidente es el titular de la unión pública centralizada en México y de ahí si ellos son los que propusieran que se centralizaran los órganos de justicia, los jueces qué podríamos hacer, tendríamos que resolver conforme a las leyes que emita el Congreso, igual el sistema federal mexicano, que si las emite la federación las deben de acatar los estados locales y bajando hacia el federalismo. -----

Advierto yo aquí, por eso tocaba el tema y por esto lo inicié desde ese ángulo, se establece en la Constitución, como decía el Magistrado González Cendejas, el derecho político-electoral, la forma en que se da hacia los Jefes de Tenencia varía, sí es cierto, en la elección como debiese de ser, pero esto no nos puede impedir a considerar que sea materia electoral, porque frente a cualquier artículo que se te contraponga a la Constitución, todos los jueces desde primera instancia, municipales o federales, deben aplicar la Constitución, y si esta Constitución de México que por cierto muy sólida y jamás he compartido de que México tiene una democracia en pañales, no es una democracia tan sólida que aquí se está viendo, las autoridades que se ponen, se quedan y tan democracia sustancial que se pueden acudir a estas instancias para revisar que se respeten los derechos político-electorales. -----

Entonces qué tiene, yo hablaba de candados, ¿qué candado tiene la Ley Orgánica Municipal, que no se estableció este sistema como lo ordena la Constitución?, bueno ¿qué tenemos que hacer los jueces locales?, aplicar la Constitución, ¿por qué?, porque es un mandato del 133 constitucional, las leyes que emanen de esta Constitución son ley suprema de la Unión y los tratados, estamos aplicando, aquí estimo yo, al menos desde mi parte y por eso votaré en el sentido del proyecto en contra, que se está aplicando y la razón la refuerzo, cuáles son los neo-paradigmas de los estudios socio-legales contemporáneos como forma de los modelos racionales de la racionalidad jurídica que deben contenerse hoy en las sentencias y esto por lo menos a partir de los últimos 25 años para acá, que es cuando inician estos estudios a través de Sarto, Ellescaning, Tamanaha y diversos autores, son bastantes, son de que ya no tenemos que ver el modelo, como que nace con la pregunta, tenemos que ver el modelo de la racionalidad con la consecuencia final que es la respuesta y si esta puede sostenerse para poder tener una vida autónoma y no artificial. -----

Así es como entonces yo analizo a la inversa el proyecto, qué me pides administrativo, cuál sería la consecuencia final a través de la respuesta, pues que es electoral y que no se respetaron estos canales, que no los tengo yo porque nos aplica un formalismo jurídico, nuevamente de un federalismo que si bien el Congreso del Estado no nos dio esa facultad y la federación tampoco nos la ha dado y no está en ninguna ley federal que la podamos aplicar, bueno, tenemos que enviarla a quien la tiene, a través del JDC, ya mencionado aquí por los compañeros Magistrados ya no abundo en esto, y concluiría diciendo que estaría de acuerdo en que se acumularan ¿por qué?, al final de cuentas llegaría un sólo proyecto al que tenga que resolver en la Sala correspondiente, de materia federal, esto simplifica mucho las cosas, abona al expediente de la justicia, pero sí me quedo yo con una duda que obviamente no está en el proyecto, pero la externo, y si el contencioso-administrativo, porque no requerimos para saber si tiene más asuntos o no, les ha dado trámite o los ha resuelto, ¿qué va a pasar?, esto ya me preocupa sobremanera, porque yo estoy votando y lo veo muy claro con los elementos que tengo en el proyecto, no soy el instructor, pero sí me queda esa duda, y ¿si resuelve el Contencioso algo?, y ¿si la Sala resuelve algo?, y ¿si se resuelve al mismo tiempo y si no requerimos y si no lo sabemos?, bueno, al no tener yo esos elementos doy todas estas razones para votar en el sentido contrario del proyecto, con pleno respeto, ya

TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA GENERAL
DE ACUERDOS

que advierto también que la regla de la ley al ser una narrativa lingüística para la designación de los modelos que permitan justificar la existencia jurídica de la vida de los Estados, hay a la vez otra leyes, que también es una narrativa lingüística, aquí hay dos choques, por decirlo de esta manera, de dos prescripciones, el Contencioso Administrativo con su ley que puede ser acto administrativo y el Tribunal que encontramos esto.-----

¿Quién nos va a definir? El propio mandato constitucional federal, el sistema central, al final de cuentas, esta Constitución, las leyes que manden son ley suprema de la unión, la ley suprema de la unión establece que hay un canal para poder llevar a cabo elecciones, si el canal no es el más idóneo que se estableció en la Ley Orgánica Municipal, que es ya, de tiempo atrás, antes de la reforma que mencionaba la Presidenta, no podemos desconocer el mandato constitucional.-----

Entonces, abono a lo que ya había dicho y hago esto para acotar la situación de que el voto que emito es bajo esta racionalidad y bajo estos neo-paradigmas del Sistema de Estado de Derecho, que actualmente está rigiendo de los últimos 25 años hacia acá, en México. Es cuanto, gracias Presidenta.-----

MAGISTRADA PRESIDENTA MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ.- ¿Alguna otra intervención? Al no haber intervenciones, Secretario por favor a votación. --

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Señores Magistrados, en votación nominal se consulta si aprueban los proyectos de Acuerdo de Pleno de los Asuntos Especiales identificados con las claves TEEM-AES-001/2013 al TEEM-AES-042/2013, interpuestos por Ma. Irma Guerra Vidales y otros.-----

MAGISTRADO FERNANDO GONZÁLEZ CENDEJAS.- En contra de los proyectos.-----

MAGISTRADO ALEJANDRO SÁNCHEZ GARCÍA.- En contra del proyecto, a favor de las acumulaciones.-----

MAGISTRADO JORGE ALBERTO ZAMACONA MADRIGAL.- Son mi consulta.-----

MAGISTRADA PRESIDENTA MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ.- En contra.-----

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Señora Presidenta me permito informarle, que los proyectos han sido rechazados por tres votos en contra y uno a favor.-----

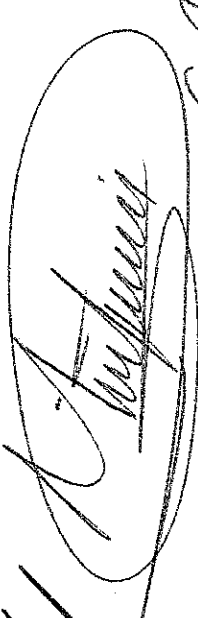
MAGISTRADA PRESIDENTA MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ.- Gracias Secretario. Toda vez que la decisión mayoritaria del Pleno fue rechazar los proyectos sometidos a nuestra consideración, se somete a consideración de los Magistrados, que la encargada del engrose correspondiente, sea la ponencia a mi cargo.-----

Magistrados, en votación económica se consulta si están de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa. Aprobado por mayoría.-----

En consecuencia, se designa a la ponencia a mi cargo... Si Magistrado.-----



TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA GENERAL 32
DE ACUERDOS


MAGISTRADO JORGE ALBERTO ZAMACONA MADRIGAL.- Disculpe la intervención, no. Considero que me debo de abstener en el engrose respectivo, si, no es voto en contra, es de la abstención, es que no se tomó al respecto. Gracias.-----

MAGISTRADA PRESIDENTA MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ.- Gracias Magistrado. Para que tome notas Secretario, por favor. Si Magistrado.-----

MAGISTRADO ALEJANDRO SÁNCHEZ GARCÍA.- El Código Electoral, establece que quien esté presente en los asuntos no puede abstenerse, deberá de votar a favor o en contra. El Código, nuestro Código lo establece, quien esté presente en la discusión. Entonces, no puede haber abstenciones, o sea, lo digo con pleno respeto, en base al mismo Código.-----

MAGISTRADA PRESIDENTA MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ.- Entonces, le daría el uso de la voz al Magistrado Zamacona Madrigal.-----

MAGISTRADO JORGE ALBERTO ZAMACONA MADRIGAL.- Gracias Presidenta. Insisto en mi abstención. El Código efectivamente dice que los Magistrados no podrán negarse o abstenerse de votar, salvo, dos excepciones. Punto número 1. Cuando no estén presentes en la discusión del asunto. Punto número 2. Cuando tengan algún tipo de interés, yo en el caso concreto, prefiero abstenerme y creo que nada afecta a la vida de este Pleno. Gracias.-----


MAGISTRADA PRESIDENTA MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ.- Gracias Magistrado. Por favor Secretario, si toma nota.-----

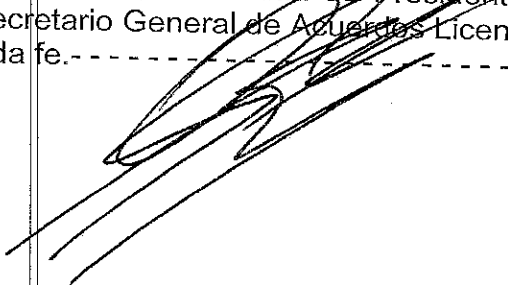
En consecuencia, se designa a la ponencia a mi cargo para que realice el engrose del fallo con las consideraciones y razonamientos jurídicos manifestados en esta sesión, a fin de que sea remitido el expediente a la Sala Regional de la V Circunscripción Plurinominal del Poder Judicial de la Federación, para los efectos legales conducentes.-----

Secretario General de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión por favor.-----

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Magistrada Presidenta, me permito informarle que han sido agotados los puntos del orden del día, aprobados para esta sesión.

MAGISTRADA PRESIDENTA MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ.- Señores Magistrados, rendida la cuenta y recabada su decisión a través del voto respectivo, se declara cerrada esta sesión pública. Muchas gracias, buenas tardes. (**Golpe de martillo**)-----


Se declaró concluida la sesión, siendo las trece horas con veintisiete minutos del día de su fecha. En cumplimiento a lo previsto en la fracción II, del artículo 283, del Código Electoral del Estado de Michoacán, se levanta la presente acta, la cual consta de treinta y cuatro fojas, para los efectos legales procedentes, firman al margen y al calce los Magistrados Fernando González Cendejas, Alejandro Sánchez García, Jorge Alberto Zamacona Madrigal y la Magistrada María de Jesús García Ramírez, en su calidad de Presidenta del Tribunal Electoral del Estado, con el Secretario General de Acuerdos Licenciado Omar Cardenas Ortiz, quien autoriza y da fe.-----


TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA GENERAL
DE ACUERDOS 33

MAGISTRADA PRESIDENTA

MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ

MAGISTRADO

FERNANDO GONZÁLEZ
CENDEJAS

MAGISTRADO

ALEJANDRO SÁNCHEZ GARCÍA

MAGISTRADO

JORGE ALBERTO ZAMACONA MADRIGAL

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS



TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA GENERAL
DE ACUERDOS

OMAR CÁRDENAS ORTIZ

El suscrito Licenciado Omar Cárdenas Ortiz, Secretario General de Acuerdos, hago constar que las firmas que obran en la presente foja, forman parte del Acta de Sesión de Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, identificada bajo el número TEEM-SGA-016/2013, misma que fue levantada con motivo de la sesión pública ordinaria verificada el jueves 3 de octubre de 2013 dos mil trece y que consta de treinta y cuatro fojas incluida la presente. Doy fe.



TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA GENERAL
DE ACUERDOS